



Boletín Oficial



ORGANO DE DIFUSION OFICIAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Franqueo pagado, publicación periódica. Permiso núm. 005 1021
características: 114182816. Autorizado por SEPOMEX

Tomo III Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Miércoles 31 de Diciembre de 2008 No. 135

SEGUNDA SECCIÓN INDICE

Publicación Estatal:	Página
Decreto No. 023 Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chiapas.....	2 ✓
Decreto No. 024 Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chiapas.	15
Decreto No.025 Ley Orgánica del Instituto de Energías Alternativas, Renovables y Biocombustibles del Estado de Chiapas	25 ✓
Decreto No. 026 Decreto que crea el Instituto Estatal del Agua.	34 ✓
Decreto No. 027 Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Decreto por el que se autoriza al Gobierno del Estado a otorgar pensiones y becas, a consortes e hijos de los fallecidos el día 03 de octubre de 2008, en el Municipio de La Trinitaria, Chiapas, e indemnizaciones a los directamente afectados en los mismos.	47 ✓
Decreto No. 028 Decreto por el que se acepta la renuncia presentada por el ciudadano José Antonio Villamontes Pérez, para separarse del cargo de síndico propietario del ayuntamiento municipal de Rayón, Chiapas.	49
Decreto No. 123 Decreto por el que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Instituto de las Artesanías y Productos de Chiapas.	52

Publicaciones Estatales:

**Secretaría de Gobierno
Dirección de Asuntos Jurídicos
Departamento de Gobernación**

Decreto Número 023

Juan Sábines Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber: Que la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado, se ha servido dirigir al Ejecutivo a su cargo el siguiente:

Decreto Número 023

La Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución Política Local; y,

Considerando

Que el artículo 29, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, faculta al Honorable Congreso del Estado, a legislar en las materias que no estén reservadas al Congreso de la Unión, así como, en aquellas en que existan facultades concurrentes, conforme a leyes federales.

En un Estado de Derecho como el que se ha privilegiado en Chiapas, es tarea esencial de las autoridades salvaguardar la integridad y los derechos de los ciudadanos, así como preservar sus libertades, el orden social y la seguridad de las personas y su patrimonio, siendo ésta tarea, la primera responsabilidad del Estado en términos históricos y jerárquicos.

A partir de diciembre de dos mil seis, la Federación se planteó como reto combatir frontalmente a la delincuencia y procurar disminuir los índices de criminalidad en el país, proponiendo para ello la implantación de un nuevo modelo de justicia penal en México, así como diversas acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública, la procuración y la administración de justicia.

Así, a instancia del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, el sistema de justicia en México ha vivido cambios trascendentales en su integración y los alcances que tiene, y acompañado de los Estados y Municipios que han participado responsablemente, se trabaja en la adecuación e institución de un marco jurídico penal moderno, que permita cumplir las expectativas de los justiciables, con pleno respeto a sus derechos fundamentales, a la vez que hará posible el combate efectivo a la criminalidad.

A la luz de esa transformación y como pieza toral para abandonar un sistema penal mixto con elementos tanto inquisitivos como acusatorios, plagado de formalismos excesivos, candados y lagunas

legales; el dieciocho de junio del año en curso, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del cual México adopta por fin un sistema de justicia penal plenamente acusatorio, con juicios orales y procesos simplificados, con el cual sin abandonar los principios garantistas, se logrará una investigación de los delitos más ágil, transparente y mucho más profesional, que sirva como instrumento para combatir la delincuencia y el crimen organizado.

Es pues, una de las acciones más relevantes, pero a la vez más decisiva de la Federación, para abandonar viejas prácticas de nuestro sistema jurídico y alcanzar los anhelos de seguridad y justicia de la ciudadanía, que impone a los Estados y Municipios de nuestro País, un compromiso enorme y una responsabilidad absoluta en la transformación de la estructura y funciones del Poder Judicial, la Seguridad Pública y la Procuración de Justicia local.

En ese sentido es importante mencionar, que nuestro Estado no ha sido estático a la convocatoria del Presidente de la República y mucho menos a la demanda ciudadana de procurar un México más seguro y sin violencia; así ha promovido diversas acciones para modernizar el sistema de justicia en Chiapas, inclusive poniéndolo a la vanguardia a nivel nacional a través de la creación de instituciones modernas como la Magistratura Superior del Estado y el Ministerio de Justicia, órganos encargados de la administración y procuración de justicia local, fortalecidos en sus atribuciones y con una estructura funcional que permite que Chiapas sea la segunda Entidad Federada más segura del país, con una legislación actualizada, que brinda certeza a los actos de gobierno y certidumbre plena para el respeto y garantía de los derechos de los ciudadanos.

Asimismo, se debe destacar que nuestro Estado fue partícipe del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, asumiendo con responsabilidad los compromisos establecidos en él, y como consecuencia de ello, se suscribió a nivel local, un acuerdo con similares características, denominado Acuerdo por un Chiapas Aún Más Seguro, en el que se fijan acciones a corto plazo para adecuar nuevamente nuestra normatividad y promover la implementación de esquemas que fortalezcan aún más las tareas de seguridad pública, y en general de justicia, tendentes a combatir la delincuencia y la criminalidad en la Entidad.

En esta transformación integral, ninguna acción debe quedar a la zaga de las políticas públicas implementadas para combatir a la delincuencia organizada, mucho menos aún, a lo mandatado por el Constituyente Permanente en la reforma de junio de dos mil ocho, y persiguiendo un mismo objetivo, de manera coordinada y con una participación responsable, Federación, Estado y Municipio, deben alinear acciones y conjuntar esfuerzos para construir un México más seguro, libre de delincuencia e inseguridad.

Para ello, es importante modificar la estructura y atribuciones de los órganos que participan en las tareas relacionadas con seguridad, procuración y administración de justicia en el Estado, así como definir esquemas que permitan concurrir y participar en esta tarea con las instituciones de la Federación y los Municipios, además de adecuar la normatividad constitucional y ordinaria local, a lo establecido en nuestra Carta Magna. En ese tenor, Chiapas se propone llevar a cabo una transformación integral a sus instituciones y al orden jurídico local, pugnando por la dignificación y profesionalización de los cuerpos de policía y seguridad pública estatal, así como por la evaluación y certificación de éstos

servidores públicos, además de los que intervienen en la procuración y administración de justicia, la reestructuración del Ministerio Público y por supuesto, del Poder Judicial local.

Así, en el marco de las modificaciones a la Constitución Política local, aún y cuando en Chiapas contamos con un sistema de justicia fortalecido, moderno y con órganos sólidos, confiables y a la vanguardia, el Poder Judicial no puede quedar al margen de los cambios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello, debe procurar una transformación integral, que le permita cumplir con los objetivos y metas fijados en materia de seguridad y justicia en el Estado.

En ese sentido, a través de la presente reforma se consolida al Poder Judicial como un órgano de vanguardia, que acompañado de las experiencias y modelos implementados por la Federación, realice bajo una sola directriz las funciones administrativas y jurisdiccionales que le corresponden tanto a la Magistratura Superior como al Consejo de la Magistratura, a efecto de evitar acciones contradictorias o implantar criterios diversos que dificulten el manejo de los recursos a su cargo, y que a la vez permitan una mejor y mayor optimización de éstos, por medio de la orientación y conducción armónica del Titular del Poder Judicial del Estado, quien será el titular de ambos órganos, como se encuentra previsto en la Constitución Federal, los cuales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto se denominarán Tribunal Superior de Justicia del Estado y Consejo de la Judicatura, respectivamente, con lo cual se dará mayor identidad a sus atribuciones, identificándolos plenamente con las que realizan sus homólogos en otros Estados e incluso en la Federación.

Es claro pues, que en esta lucha contra el crimen organizado, la transformación social y el establecimiento de un Estado de Derecho basado en el respeto a la legalidad, México requiere de la participación de todos los mexicanos, así como de la coordinación de las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno y el compromiso conjunto de las autoridades y de la ciudadanía, con la finalidad de que todas las políticas implementadas, se materialicen a la brevedad en cambios tangibles a través de los cuales se logre recuperar la confianza y seguridad absoluta en las instituciones públicas.

Por ello, con la presente reforma se busca armonizar nuestra Constitución Local al texto Constitucional Federal, en la parte relacionada con la integración y conformación del Poder Judicial, las atribuciones de sus órganos y el funcionamiento general de éste, adecuando nuestra norma fundamental a los principios establecidos para el tratamiento del Poder Judicial Federal, en donde el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo es también del Consejo de la Judicatura Federal, además de adecuar la denominación del órgano en que se deposita el Poder Judicial del Estado, de Magistratura Superior a Tribunal Superior de Justicia del Estado y la del Consejo de la Magistratura por la de Consejo de la Judicatura, para fortalecer su identidad y las de los órganos que lo conforman.

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 83 de la Constitución Política Local, en sesión de fecha 26 de diciembre del presente año, el Honorable Congreso del Estado de Chiapas, aprobó la Minuta Proyecto de Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, misma que fue publicada en el periódico oficial número 133 tomo III de fecha 26 de diciembre del año 2008, remitiendo la documentación correspondiente a todos los Ayuntamientos para los efectos Constitucionales correspondientes.

Que habiéndose recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios de esta Soberanía Popular, las actas de cabildo de los ayuntamientos de la entidad; la Comisión Permanente de ésta Sexagésima Tercera Legislatura en sesión del día de hoy, procedió a realizar el cómputo

correspondiente, declarando la recepción de 63 actas de cabildo de igual número de ayuntamientos donde consta la aprobación de la Minuta Proyecto; siendo estos los Municipios de:

ACACOYAGUA, ACALA, ACAPETAHUA, ALTAMIRANO, AMATENANGO DE LA FRONTERA, AMATENANGO DEL VALLE, ÁNGEL ALBINO CORZO, ARRIAGA, BELLA VISTA, BERRIOZABAL, BOCHIL, CINTALAPA, COAPILLA, COPAINALA, CHAPULTENANGO, CHIAPA DE CORZO, CHIAPILLA, CHICOMUSELO, EL BOSQUE, EL PORVENIR, FRONTERA COMALAPA, HUEHUETÁN, HUITIUPÁN, HUIXTLA, IXHUATÁN, IXTACOMITÁN, IXTAPA, JITOTOL, JUÁREZ, LA CONCORDIA, LA GRANDEZA, LA INDEPENDENCIA, LAS MARGARITAS, LAS ROSAS, MAPASTEPEC, MAZAPA DE MADERO, MAZATAN, MOTOZINTLA, OCOTEPEC, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OXCHUC, PALENQUE, PANTEPEC, PIJJIAPAN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, REFORMA, SAN ANDRES DURAZNAL, SAN FERNANDO, SILTEPEC, SOCOLTENANGO, SOYALO, SUCHIAPA, TAPALAPA, TEOPISCA, TONALA, TOTOLAPA, TUXTLA GUTIERREZ, TUXTLA CHICO, TUZANTAN, VILLA COMATITLAN, VILLA CORZO, VILLAFLORES, Y YAJALON.

En esa virtud, con los razonamientos y fundamentos expuestos, para los efectos de la fracción II del Artículo 83 de nuestra Constitución política Local, se acuerda la publicación del siguiente:

DECRETO QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Artículo Único.- Se reforma el inciso b), de la fracción II, del artículo 18; se reforma la fracción III y el párrafo segundo, del artículo 27; se reforma la fracción XXXV, del artículo 29; se reforma la fracción XXI, del artículo 42; se reforma el párrafo noveno, del artículo 47; se reforman los párrafos cuarto, séptimo y noveno, del artículo 49; se reforma la denominación del Capítulo Segundo, del Título Sexto; se reforman los párrafos primero, quinto, sexto y séptimo, del artículo 50; se reforma la fracción V, del párrafo segundo, del artículo 51; se reforman los párrafos segundo, tercero y quinto, del artículo 52; se reforma el párrafo único, del artículo 53; se reforman los párrafos tercero y sexto, del artículo 54; se reforman los párrafos primero, quinto, sexto, séptimo y noveno, del artículo 55; se reforma la denominación del Capítulo Quinto, del Título Sexto; se reforman los párrafos primero, segundo, cuarto, quinto y séptimo del artículo 57, y se derogan las fracciones I, II y III, del párrafo segundo, del mismo numeral; se reforman los párrafos primero, tercero y cuarto, del artículo 71; se reforman los párrafos primero y segundo, del artículo 72; se reforman los párrafos primero y tercero, del artículo 73; se reforma el párrafo primero, del artículo 75; todos de la Constitución Política del Estado de Chiapas, para quedar como sigue:

Artículo 18.- No podrán ser ...

I. ...

II. Los funcionarios ...

a) ...

b) Los Magistrados, Consejeros y Jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

c) al e). ...

Artículo 27.- El derecho de ...

I. a la II. ...

III. Al Titular del Poder Judicial del Estado, en materia de su ramo;

IV. a la V. ...

Las iniciativas presentadas por el Gobernador, por el Titular del Poder Judicial del Estado y por los Ayuntamientos pasarán desde luego a la Comisión; las que presenten los Diputados se sujetarán a los trámites que determine el Reglamento Interno del Congreso.

Artículo 29.- Son atribuciones del ...

I. a la XXXIV. ...

XXXV Dirimir los conflictos que se susciten entre el Ejecutivo y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, salvo que se trate de controversias sobre la constitucionalidad de sus actos, las que están reservadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

XXXVI. a la LI. ...

Artículo 42.- Son facultades y ...

I. a la XX. ...

XXI. Someter a consideración del Congreso o de la Comisión Permanente, los nombramientos de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado y los señalados en el artículo 49 de esta Constitución;

XXIII. a la XXVIII. ...

Artículo 47.- El Ministerio Público ...

En el caso de ...

En la investigación ...

El Ministerio de ...

Los Fiscales de ...

El Ministerio de ...

El Gobernador ...

El Ministro de ...

El salario de los Fiscales de Distrito, así como del Fiscal Electoral será el equivalente a los que perciban los Consejeros que integran el Consejo de la Judicatura del Estado.

La Fiscalía Electoral ...

Por ser nombrado ...

I. a la VI. ...

El Ministro de ...

La ratificación o ...

La ley establecerá ...

El Ministro de ...

Los Fiscales Especializados ...

El Ministro de ...

El Ministro de ...

En todos los ...

El Ministro de ...

El Consejo de ...

El Consejo de ...

El Consejo de ...

El Ministerio de ...

La Contraloría General ...

Artículo 49.- Corresponde al Poder Judicial ...

La impartición de justicia en ...

En cualquiera de sus ...

El Poder Judicial para el ejercicio de sus atribuciones se deposita en un Tribunal Superior de Justicia del Estado, que estará compuesto por un Tribunal Constitucional, Salas Regionales Colegiadas, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados y Salas Especializadas en Justicia para Adolescentes, Juzgados de Paz y Conciliación, Juzgados de Paz y Conciliación Indígena y Juzgados Municipales, un

Centro de Justicia Alternativa y un Instituto de la Defensoría Social; un Consejo de la Judicatura; un Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa; y un Tribunal del Trabajo Burocrático. Las particularidades de su organización y desempeño, serán previstas por un Código de Organización del Poder Judicial y en el Reglamento Interior que al efecto emita cada uno de sus órganos, con base en lo dispuesto en esta Constitución y demás normatividad aplicable.

El Tribunal de Justicia Electoral ...

El Tribunal del Trabajo ...

Dos por el Poder Ejecutivo, uno por el Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado; uno propuesto por la mayoría de los Municipios de la Entidad y hasta un máximo de tres propuestos de la misma forma por las unidades burocráticas de mayor representatividad en el Estado.

El Presidente del Tribunal ...

La designación de los Magistrados nombrados por el Ejecutivo del Estado será directa. El Magistrado cuya propuesta provenga de los Ayuntamientos, deberá ser aprobado por el Congreso del Estado en términos del Código de Organización del Poder Judicial del Estado. Todos los Magistrados integrantes del Tribunal del Trabajo Burocrático deberán reunir los mismos requisitos que se exigen para ser Magistrado de las Salas Regionales del Tribunal Superior de Justicia del Estado; además deberán contar con experiencia en materia laboral acreditada por un período no menor de tres años. Durarán en el encargo cuatro años sin posibilidad de reelección.

El Tribunal del Trabajo Burocrático ...

Esta Constitución y la Ley respectiva ...

Ningún funcionario del Poder Judicial ...

CAPÍTULO SEGUNDO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO

Artículo 50.- El Tribunal Superior de Justicia del Estado se integra por un Tribunal Constitucional, el número de Salas Regionales Colegiadas por materia, mixtas y Especializadas en Justicia para Adolescentes y los Juzgados de Primera Instancia, Juzgados Especializados en Justicia para Adolescentes, Juzgados de Paz y Conciliación, Juzgados de Paz y Conciliación Indígena y Juzgados Municipales que determine el Consejo de la Judicatura, de acuerdo con las atribuciones y facultades señaladas en esta Constitución y la Ley respectiva, así como por un Centro de Justicia Alternativa y un Instituto de la Defensoría Social.

El Tribunal Constitucional se ...

Los Magistrados de ...

El Tribunal Constitucional ...

El Presidente del Tribunal Constitucional lo será también del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien será electo cada tres años con posibilidades de reelección hasta por una sola vez y a él corresponderá la administración del Tribunal Constitucional.

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, será el Titular del Poder Judicial en Chiapas. De manera anual, enviará al Congreso del Estado, un informe escrito sobre el estado que guarda la impartición y administración de justicia.

El Tribunal Superior de Justicia del Estado elaborará su proyecto de presupuesto; el Consejo de la Judicatura lo hará para el resto del Poder Judicial del Estado. En los términos del artículo 57 de esta Constitución, los proyectos elaborados y aprobados por cada uno de los órganos facultados para hacerlo, serán incluidos dentro del proyecto de presupuesto del Poder Judicial del Estado y remitidos por el Consejo de la Judicatura para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado.

Cuando concurriere ...

El Titular del Ejecutivo ...

Artículo 51.- El Tribunal Constitucional ...

Tendrá las siguientes ...

I. a la IV. ...

V. Designar a los miembros del Consejo de la Judicatura y del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa que correspondan al Poder Judicial.

VI. a la VII. ...

Artículo 52.- Los nombramientos de ...

Los nombramientos de los Magistrados de las Salas Regionales Colegiadas y de las Salas Especializadas en Justicia para Adolescentes, los hará el Titular del Poder Ejecutivo en los términos del artículo 50 de esta Constitución; dichos nombramientos deberán ser aprobados por el Congreso del Estado o la Comisión Permanente en su caso.

En caso de ratificación, el Ejecutivo podrá recabar la opinión del Consejo de la Judicatura, en términos de la Ley respectiva.

Cuando el Congreso ...

Cuando ocurra una vacante definitiva por defunción, renuncia, incapacidad o cualquier otra causa de algún Magistrado de Sala el Consejo de la Judicatura dará aviso inmediato al Titular del Poder Ejecutivo para que proceda al nombramiento de la magistratura vacante, en términos del artículo 50, de esta Constitución.

Artículo 53.- Para ser Magistrado integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado se requiere:

I. a la VIII. ...

Artículo 54.- El Código de Organización ...

El Reglamento respectivo ...

De igual forma la Ley establecerá las bases mínimas para la práctica de las visitas judiciales y la emisión de los dictámenes correspondientes, realizados por la Visitaduría del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.

La Visitaduría estará ...

El Poder Judicial del Estado ...

La remuneración de los Jueces, Magistrados y Consejeros de la Judicatura, no podrá ser disminuida durante el tiempo de su gestión.

Artículo 55.- Los Magistrados de Salas Regionales Colegiadas y Especializadas en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, durarán en sus funciones seis años, con posibilidad de ser reelectos en los términos de la Ley de la materia.

Tanto jueces como ...

Los beneficios recibidos ...

Los Magistrados exclusivamente ...

Los Jueces de Primera Instancia que durante seis años consecutivos presten sus servicios en el Poder Judicial del Estado, en forma tal que se hayan distinguido por su diligencia, probidad, honradez en el ejercicio de sus funciones y honorabilidad en su conducta ciudadana, podrán ser reelectos por el Consejo de la Judicatura y exclusivamente serán removidos por las causales y en los términos del Título Noveno de esta Constitución y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, por negligencia en el desempeño de sus labores, o por dejar de reunir alguno de los requisitos que señala la ley para ocupar el cargo.

Los Jueces de Paz y Conciliación, de Paz y Conciliación Indígenas, serán nombrados por el Consejo de la Judicatura a propuesta de los Ayuntamientos respectivos, tomando en consideración su calidad de conciliadores reconocida por el Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado, así como su correspondiente acreditación por el órgano encargado de la Carrera Judicial y demás normatividad que para tal efecto contemple el Código de Organización del Poder Judicial del Estado. El mismo mecanismo de nombramiento será aplicable a los Jueces Municipales, con excepción del reconocimiento y acreditación como conciliadores.

El Titular del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado, también será nombrado por el Consejo de la Judicatura, de entre aquellos que aprueben satisfactoriamente el curso de formación para mediadores y conciliadores y hayan resultado electos mediante un proceso riguroso de oposición. Las bases, requisitos y procedimientos para la designación de los demás funcionarios del Centro, estarán fijados en la Ley, sin contravenir a lo establecido en esta Constitución.

Los Jueces de Primera Instancia ...

Las decisiones del Pleno del Consejo de la Judicatura serán definitivas e inatacables.

CAPÍTULO QUINTO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Artículo 57.- El Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder Judicial del Estado, con independencia técnica, encargado de la vigilancia, disciplina, administración y carrera judicial de los órganos del Poder Judicial, con las excepciones previstas en esta Constitución.

El Consejo de la Judicatura se integrará por cinco miembros, dos serán representantes del Poder Judicial, de los cuales uno será el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que también lo será del Consejo, y el otro será designado por el Tribunal Constitucional, por insaculación en audiencia pública de entre una lista de cinco jueces de primera instancia, tomando en consideración los criterios de antigüedad, representación proporcional y eficiencia en el desempeño de sus funciones; dos Consejeros designados por el Congreso del Estado o por la Comisión Permanente, en su caso; y uno nombrado por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

I. a la III. Se derogan.

Los Consejeros nombrados ...

Los Consejeros de la Judicatura deberán ser personas que se hayan distinguido por su capacidad, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de su profesión, deberán tener cuando menos treinta años de edad cumplidos al día de la designación y contar con una antigüedad mínima de cinco años en el ejercicio profesional, con título y cédula de licenciado en derecho, además de cumplir con las condiciones establecidas en las fracciones I, IV, V y VI, del artículo 53, de esta Constitución; y ejercerán sus atribuciones con independencia e imparcialidad. Los Consejeros quedarán sujetos a las responsabilidades que establecen el Título Noveno de esta Constitución, el Código de Organización del Poder Judicial del Estado y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

El Consejo de la Judicatura será presidido por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y contará con un Secretario Ejecutivo que será designado por el propio Consejo, a propuesta de su Presidente.

Corresponde al Consejo de la Judicatura:

I. a la VIII. ...

Para los efectos de la fracción V del presente artículo, la administración, vigilancia y disciplina de los recursos presupuestales del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa y del Tribunal del Trabajo Burocrático, corresponderá en los términos que señale la Ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura, que estará integrada para el caso del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa por su Presidente, un Magistrado del mismo Tribunal designado por insaculación y un Consejero de la Judicatura. La Comisión de Administración del Tribunal del Trabajo Burocrático estará integrada, por su Presidente y dos Consejeros de la Judicatura. Las comisiones de cada uno de estos órganos del Poder Judicial, serán presididas por sus titulares, respectivamente, y tendrán atribución para presentar su anteproyecto de presupuesto al Consejo de la Judicatura, para su inclusión en el proyecto del presupuesto del Poder Judicial del Estado.

Artículo 71.- Podrán ser sujetos de juicio político: el Gobernador del Estado, los Diputados Locales, los Magistrados y los Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, los Secretarios de Despacho, el Ministro de Justicia del Estado, el Fiscal Electoral, los Fiscales de Distrito, el Presidente de la Comisión de Fiscalización Electoral, los Coordinadores Generales, los Presidentes Municipales, los Consejeros Electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, los Directores Generales o sus equivalentes de los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal, Fideicomisos Públicos y el Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos.

Cuando los servidores ...

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este artículo, el Congreso del Estado erigido en Jurado de Acusación, procederá a la acusación respectiva ante el Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión del mismo, después de haber substanciado el procedimiento respectivo y con la audiencia del inculcado.

En conocimiento de la acusación, y erigido el Tribunal de Sentencia, el Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado aplicará la sanción correspondiente mediante resolución emitida cuando menos por mayoría de votos de los miembros presentes reunidos en Pleno, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado, de su defensor y de una Comisión del Jurado de acusación integrada por dos diputados.

Las sanciones consistirán ...

Artículo 72.- Cuando se trate de actos u omisiones sancionados por la ley penal cometidos por el Gobernador del Estado, por los Diputados Locales, por los Magistrados y Consejeros del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por los Secretarios y Subsecretarios de Despacho, por el Ministro de Justicia del Estado, Fiscales de Distrito y el Fiscal Electoral, el Presidente de la Comisión de Fiscalización Electoral; los Coordinadores Generales, los Presidentes, Síndicos y Regidores Municipales, el Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, los Directores Generales o sus equivalentes de los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal y de Fideicomisos Públicos, el Congreso del Estado o en su caso la Comisión

Permanente, erigidos en jurado declarará por dos tercios de los votos de sus miembros presentes, cuando se trate del Gobernador y por mayoría relativa cuando se trate de los otros servidores públicos enunciados en este precepto, si ha lugar o no a formación de causa. En caso afirmativo, quedará el acusado por ese sólo hecho, separado de su encargo y sujeto a la acción de los Tribunales del orden común; si ésta culmina en sentencia absolutoria el inculcado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto. En caso negativo, no habrá lugar a procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculcado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.

Cuando el Gobernador del Estado, los Diputados al Congreso del Estado y los Magistrados y los Consejeros del Tribunal Superior de Justicia del Estado incurran en delitos federales, recibida que sea la declaratoria de procedencia a que se contrae el artículo 111 de la Constitución General de la República, el Congreso del Estado erigido en jurado, por los dos tercios de los votos de sus miembros presentes, cuando se trate del Gobernador y por mayoría relativa cuando se trate de los demás, determinará la procedencia o no de dicha declaración, en caso afirmativo quedará el inculcado separado de su cargo, en tanto esté sujeto a la acción de los Tribunales del orden Federal. Si la sentencia fuese condenatoria la separación de su cargo será definitiva. En caso negativo la declaratoria de referencia se desechará de plano, sin perjuicio de que la imputación por la comisión de delito continúe su curso cuando el inculcado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.

Las sanciones penales ...

Las sanciones económicas ...

En demandas del ...

Artículo 73.- De los actos u omisiones en que incurran los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, que impliquen responsabilidad administrativa, conocerá el Congreso del Estado como Jurado de Acusación y el Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado erigido en Tribunal de Sentencia; el Jurado de acusación declarará por mayoría relativa de sus miembros presentes si el encausado es o no culpable, si la declaración fuere de inculpabilidad, el servidor público continuará en el ejercicio de su cargo, si fuere la de culpabilidad quedará separado inmediatamente del mismo y se turnará el caso al Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado en Pleno, con audiencia del encausado, de su defensor y de una Comisión del Jurado de Acusación integrada por dos Diputados Locales, resolverá por mayoría de votos lo que proceda de acuerdo con la ley.

Las sanciones por ...

La sentencia correspondiente será emitida antes de un año a partir del momento en que conozca el Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Artículo 75.- Las declaraciones y resoluciones del Congreso del Estado y del Tribunal Superior de Justicia del Estado emitidas en los casos a que se refiere este título son inatacables.

En todos los casos ...

Transitorios

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo Segundo.- Los actuales Magistrados y Jueces del Poder Judicial, seguirán ejerciendo sus funciones y concluirán el mandato para el cual fueron designados en términos y como fueron propuestos, sin que esto implique ratificación alguna ni prórroga de su encargo.

Los Magistrados y Jueces, así como demás personal jurisdiccional con intervención en actuaciones judiciales que actualmente forman parte del Poder Judicial, asumirán las mismas competencias y funciones asignadas originalmente y las que resulten conforme a este Decreto, por lo que continuarán con los trámites puestos a su conocimiento, previa razón en cada uno de ellos.

Artículo Tercero.- El actual Presidente de la Magistratura Superior del Estado, en atención a lo dispuesto en este Decreto, asumirá la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado y la Titularidad del Poder Judicial, tan pronto el mismo entre en vigencia, en términos y durante la periodicidad para la cual fue designado.

Artículo Cuarto.- Los actuales Consejeros de la Magistratura del Poder Judicial del Estado nombrados por el Congreso del Estado y el Ejecutivo Estatal, así como el elegido por insaculación de entre los Jueces de Primera Instancia de la Magistratura Superior, seguirán ejerciendo sus funciones como Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y concluirán el mandato para el cual fueron designados en términos y como fueron propuestos, sin que esto implique ratificación alguna ni prórroga de su encargo.

Toda vez que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, asume la Presidencia del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto el Consejero elegido de entre de la terna de Magistrados de las Salas Regionales, será reintegrado a su función jurisdiccional en la Sala Regional que al efecto determine el Consejo de la Judicatura.

Artículo Quinto.- El Poder Judicial del Estado, deberá adecuar su normatividad y demás instrumentos jurídicos vigentes a lo dispuesto en este Decreto, hasta en tanto, seguirán vigentes todas

aquellas disposiciones que no contravengan el presente Decreto, y en su caso, las determinaciones para resolver cualquier incidencia, se tomarán por acuerdo del Consejo de la Judicatura a propuesta de su Presidente.

Artículo Sexto.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se dé el debido cumplimiento.

Dado en el salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 30 días del mes de Diciembre de dos mil ocho. -D. P. C. Sami David David.- D. S. C. Nelly Maria Zenteno Pérez.- Rúbricas.

De conformidad con la fracción I del artículo 42 de la Constitución Política Local y para su observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil ocho.

Juan Sabinés Guerrero, Gobernador del Estado.- Noé Castañón León, Secretario General de Gobierno.- Rúbricas.

**Secretaría de Gobierno
Dirección de Asuntos Jurídicos
Departamento de Gobernación**

Decreto Número 024

Juan Sabinés Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber: Que la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado, se ha servido dirigir al Ejecutivo a su cargo el siguiente:

Decreto Número 024

La Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución Política Local; y,

Considerando

Que el artículo 29, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, faculta al Honorable Congreso del Estado, a legislar en las materias que no estén reservadas al Congreso de la Unión, así como, en aquellas en que existan facultades concurrentes, conforme a leyes federales.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 17 y 22, consagra el derecho de los ciudadanos a que se les administre justicia pronta y expedita a través de tribunales que emitirán resoluciones de manera imparcial, destacando claramente que su servicio será gratuito y que la seguridad pública será una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y Municipios, en sus respectivas competencias y así mismo, establece que las acciones de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

En ese sentido, deben resaltarse las características que robustecen este derecho público subjetivo, particularmente la prontitud e inmediatez, en razón que, constituyen el pilar de la eficacia de la justicia, lo cual significa que la impartición de justicia que merece el pueblo de Chiapas debe ser pronta, porque de lo contrario, procesos lentos y resoluciones tardías no realizan el valor de ella y ponen en peligro la esfera jurídica de los gobernados.

En el caso del Estado de Chiapas, la función pública de la procuración de justicia es responsabilidad del Poder Ejecutivo, quién, a través del Ministerio Público investiga y persigue los delitos que lesionan la paz social, con absoluto respeto a los derechos humanos, característica de la gobernabilidad democrática que se vive en nuestra entidad.

Es por ello que el pasado 28 de septiembre de 2007, a principios de esta Administración, por Decreto número 299, publicado en el Periódico Oficial número 050, del Gobierno del Estado, mediante el cual se reforman y adicionan varios artículos a la Constitución local, se propuso modernizar y transformar la institución del Ministerio Público, mediante la creación del Ministerio de Justicia del Estado de Chiapas como un organismo público independiente, jerárquicamente subordinado al Gobernador del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

El objetivo principal de esa reforma era devolver a los habitantes del Estado de Chiapas, la posibilidad de confiar nuevamente en la Institución Pública de buena fe que representa el Ministerio Público, creando una dependencia con mayor estructura orgánica y legal integrado por un Consejo de Procuración de Justicia, Fiscalías de Distrito, Especializadas y Especiales, profesionalizar la función Ministerial a través de la creación del servicio civil de carrera, así como el funcionamiento y capacitación de una policía que estará bajo su mando; todo ello bajo la denominación de Ministerio de Justicia.

A un año de su creación, hoy los Chiapanecos contamos con una de las Instituciones de Procuración de Justicia del país más confiable, segura y eficiente, que junto con las políticas públicas en materia de seguridad y justicia que ha establecido este Gobierno, nos han llevado a obtener por parte de Organismos No Gubernamentales, la calificación de ser la segunda entidad federativa más segura del país, percepción de cambio en el servicio público que resulta ser una razón para confiar.

A partir de ello, resulta indispensable realizar el cambio en la denominación de esta mejorada y moderna institución, habida cuenta que en todas la entidades federativas de la República Mexicana las dependencias responsables de la procuración de justicia adoptan en nombre de Procuradurías, adoptando el modelo federal, en un ánimo de congruencia institucional; por lo que, sin trastocar la autonomía, estructura orgánica, atribuciones legales y avances obtenidos que actualmente le correspondan y que son precisamente las características de modernidad legislativa, tecnológica, profesionalización y eficacia, resulta procedente proponer a ustedes el cambio de denominación por el Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.

En el mismo sentido, para establecer congruencia legislativa, es procedente también denominar al titular como Procurador General de Justicia del Estado, funcionario que mantendrá las mismas características jurídicas, funcionales y orgánicas que actualmente desempeña el Ministro de Justicia. Precizando que ambas propuestas de modificaciones no implican un rediseño Constitucional de la institución, sino más bien pretenden devolver su denominación de origen con una nueva y mejorada estructura orgánica y funcional, más profesional, moderna y eficiente.

Por otra parte, es importante proponer a nivel Constitucional que el Consejo de Procuración de Justicia tenga la atribución de conformar e integrar las demarcaciones de jurisdicción competencial de las Fiscalías de Distrito, tomando en consideración la experiencia de algunos que tienen diversos municipios y que generan cargas de trabajo desproporcionadas en relación con otros; para lo cual, este cuerpo colegiado en su carácter de órgano de mayor jerarquía atenderá a los planteamientos que le proponga el Procurador General de Justicia del Estado.

Por otra parte, es necesario señalar que dentro de las políticas públicas que el Gobierno de Chiapas ha establecido como prioridad, se encuentra, sin lugar a dudas, el fortalecimiento del Estado de Derecho, el respeto a la legalidad y el garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos, promoviendo para ello, una transformación integral a nuestra legislación que permita dar identidad y fortalecer a las instituciones públicas en su quehacer cotidiano y mejorar el servicio que prestan a la sociedad.

Es por ello, que en la presente Minuta se propone modificar el nombre de la dependencia Secretaría de Gobierno, encargada de la política interior del Estado, para ser identificada como Secretaría General de Gobierno, por lo que a su titular se le denominará Secretario General de Gobierno, dando así continuidad y mayor suntuosidad a las funciones que a la fecha, de forma acertada, ha llevado a cabo desde el inicio de esta Administración, y así, con esta adecuación, hacer aún mayor la vinculación nominativa del texto jurídico con las acciones de concertación, diálogo y fortalecimiento a la institucionalidad con todos y cada uno de los actores sociales y políticos de nuestra Entidad.

Por las consideraciones antes expuestas, el Honorable Congreso del Estado de Chiapas, ha tenido a bien emitir la siguiente:

MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Artículo Único.- Se reforma el inciso a), de la fracción II, del artículo 18; se reforma la fracción XXIII, del artículo 29; se reforma el artículo 41; se reforma el segundo y tercer párrafo de la fracción XXII, la fracción XXIII y XXIV, del artículo 42; se reforma el primer y cuarto párrafo del artículo 43; se reforma el Título Quinto Bis; se reforma el artículo 47, y se deroga el párrafo noveno del mismo; se reforma la fracción VI, del segundo párrafo del artículo 51; se reforma la fracción VI, del artículo 53; se reforma el inciso c), de la fracción II, del tercer párrafo del artículo 56; se reforma el primer párrafo del artículo 71; se reforma el primer párrafo del artículo 72; se reforma el primer párrafo del artículo 79; de la Constitución Política del Estado de Chiapas, para quedar como sigue:

Artículo 18.- No podrán ...

I. ...

II..

a) El Secretario General de Gobierno, los Secretarios de Despacho, los Subsecretarios de Gobierno, el Fiscal Electoral y los Fiscales de Distrito, el Presidente de la Comisión de Fiscalización Electoral, el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y los Directores Generales dependientes del Ejecutivo;

b) a e)...

Artículo 29.- Son atribuciones

I. a la XXII. ...

XXIII. Otorgar o negar la aprobación de los nombramientos de funcionarios del Poder Judicial del Estado, así como ratificar o no a los miembros de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que sometan a su consideración conforme a esta Constitución y las leyes secundarias.

XXIV. a la LI. ...

Artículo 41.- El Gobernador del Estado podrá separarse de la residencia de los poderes sin salir del territorio del Estado, por un tiempo que no exceda de dos meses. Si la separación es mayor de ese lapso, solicitará licencia al Congreso, o en su defecto a la Comisión Permanente. El Gobernador del Estado podrá ausentarse del territorio del mismo hasta por el término de un mes, previo aviso al Congreso o a la Comisión Permanente, en las ausencias del Gobernador del Estado con duración de más de quince días, el Secretario General de Gobierno asumirá la función de encargado del despacho, sin que se requiera que de aviso al Congreso del Estado, aún cuando se ausente del territorio. El permiso podrá ser renovado hasta tres ocasiones y en el caso de que se trate de un período mayor, el Congreso del Estado o la Comisión Permanente, designará un Gobernador provisional o interino, según el caso.

Artículo 42.- Son facultades ...

I. a la XXI. ...

XXII. Nombrar y...:

Nombrar con la ratificación del Congreso, o en su caso de la Comisión Permanente, al Procurador General de Justicia del Estado, al Fiscal Electoral y a los Fiscales de Distrito y removerlos libremente.

Nombrar y remover libremente a los Fiscales Especializados, a los Fiscales Especiales, al Contralor General de la Procuraduría General de Justicia del Estado y demás servidores públicos que determine su correspondiente Ley Orgánica.

XXIII. Turnar al Procurador General de Justicia del Estado los asuntos que deban ventilarse ante los tribunales, para que ejercite ante ellos sus atribuciones legales, así como proponer al Consejo de Procuración de Justicia la creación de Fiscalías Especiales, cuando así lo considere pertinente.

XXIV.- Acordar que ocurran el Secretario General de Gobierno o los Secretarios de Despacho a las sesiones del Congreso, para que den a éste los informes que pida o para apoyar en los debates de las iniciativas que presentare o las observaciones que haga el Ejecutivo a los proyectos de ley o decretos;

XXV. a XXVIII. ...

Artículo 43.- Para el despacho de los asuntos administrativos del Estado, habrá las Dependencias y Entidades que establezca la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, la que señalará las funciones que a cada una correspondan y los requisitos que deban reunir sus titulares.

Las funciones de Consejero Jurídico del Gobernador del Estado estarán a cargo de la Dependencia del Ejecutivo que para tal efecto establezca la ley.

Los Secretarios de ...

I. a la IV. ...

El Secretario General de Gobierno deberá, además, ser ciudadano chiapaneco.

El Gobernador

TÍTULO QUINTO BIS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO

Artículo 47.- El Ministerio Público...

En el caso de

En la investigación y persecución de los demás delitos del fuero común la institución del Ministerio Público, ejercerá sus atribuciones a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, auxiliándose de una policía especializada, integrada por el Buro Ministerial de Investigación, quién llevará a cabo la investigación de los delitos del orden común, bajo el mando y conducción jurídica de aquel en el ejercicio de esta función, y por la Policía de Apoyo Ministerial, encargada de desempeñar diversas actividades operativas; por lo tanto, corresponderá al Ministerio Público solicitar órdenes de aprehensión contra los inculcados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; pedir la aplicación de las penas; así como, velar porque los juicios se tramiten con apego a la ley, para que la justicia sea completa, imparcial, pronta y expedita; vigilar el debido cumplimiento de las penas impuestas; representar los intereses de los menores e incapaces, e intervenir en todos los asuntos que la ley determine.

La Procuraduría General de Justicia del Estado es un organismo público independiente, jerárquicamente subordinado al Gobernador del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios que estará integrado por un Procurador General de Justicia del Estado, quien será su titular y representante legal; ocho Fiscales de Distrito, los Fiscales Especializados, los Fiscales Especiales y un Fiscal Electoral, además, de un Consejo de Procuración de Justicia y demás personal que señale su Ley Orgánica, quienes tendrán a su cargo las atribuciones propias de la institución del ministerio público.

Los Fiscales de Distrito conocerán de los asuntos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en jurisdicciones locales de sus respectivos distritos; serán órganos que gozarán de autonomía técnica y ejercerán sus atribuciones a través del principio de unidad, dependencia jerárquica de los Ministerios Públicos de sus respectivos distritos y con sujeción a los principios de imparcialidad y legalidad. La Jurisdicción y los Municipios que integren los distritos, serán determinados mediante acuerdo del Consejo de Procuración de Justicia atendiendo a las necesidades del servicio.

La Procuraduría General de Justicia del Estado contará con las Fiscalías Especializadas en: Protección a los Derechos de las Mujeres; Atención a Delitos Cometidos en Contra de Periodistas; Coordinación General; Visitaduría; Procedimientos Penales; Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad; Jurídica Normativa; Atención a Grupos Sensibles y Vulnerables y Justicia Indígena, además de las que establezca su correspondiente Ley Orgánica o instituya por acuerdo el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, las que conocerán de los asuntos que en razón a su especialización les asigne la ley; además de las Fiscalías Especiales que cree el Gobernador del Estado o el Consejo de Procuración de Justicia a propuesta del Procurador General de Justicia del Estado, las que tendrán las atribuciones que el propio Consejo determine.

El Gobernador ...

El Procurador General de Justicia del Estado elaborará un proyecto general de presupuesto de egresos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el cual enviará al Ejecutivo para glosarlo al proyecto de presupuesto de egresos del Estado.

Se deroga.

La Fiscalía Electoral tendrá jurisdicción en todo el Estado, para el desarrollo de la función ministerial en materia de delitos electorales y formará parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Para ser nombrado Procurador General de Justicia del Estado, Fiscal Electoral, Fiscal de Distrito, o Fiscal Especializado, se deberán cumplir con los requisitos siguientes:

I. a la VI. ...

El Procurador General de Justicia del Estado, el Fiscal Electoral y los Fiscales de Distritos, serán nombrados por el Titular del Poder Ejecutivo y ratificados por la mayoría de los miembros presentes del Congreso del Estado, o en sus recesos por la Comisión Permanente.

La ratificación o

La ley establecerá la organización y funcionamiento de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

El Procurador General de Justicia del Estado, el Fiscal Electoral y los Fiscales de Distrito podrán ser removidos libremente por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

Los Fiscales Especializados y los demás servidores públicos que señale la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, serán nombrados y removidos libremente por el titular del Poder Ejecutivo del Estado. Así también los Fiscales Especiales serán nombrados y removidos por el Gobernador del Estado y deberán reunir los mismos requisitos establecidos para los fiscales de distrito.

El Procurador General de Justicia del Estado, los Fiscales de Distrito y el Fiscal Electoral durarán en su encargo siete años, y podrán ser nombrados para un segundo período.

El Procurador General de Justicia del Estado, intervendrá personalmente en las controversias y acciones a que se refiere el artículo 56 de esta Constitución.

En todos los asuntos en que el estado sea parte, el Procurador General de Justicia del Estado lo hará por sí o por medio de los funcionarios y en los demás casos en que deba intervenir la institución del Ministerio Público, lo harán los Fiscales de Distrito y el Fiscal Electoral, por sí o por medio de sus funcionarios o Fiscales del Ministerio Público, salvo disposición en contrario.

El Procurador General de Justicia del Estado, los Fiscales de Distrito, los Fiscales Especializados, los Fiscales Especiales y el Fiscal Electoral, así como los demás funcionarios de la institución del Ministerio Público serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo o el ejercicio de sus funciones.

El Consejo de la Procuración de Justicia, es el órgano colegiado de mayor jerarquía de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el cual será presidido por el Procurador General de Justicia del Estado e integrado por los Fiscales de Distrito. El Fiscal Electoral no formara parte del Consejo.

El Consejo ...

El Consejo de Procuración de Justicia, resolverá cualquier solicitud del Ejecutivo para cambiar de adscripción a los Fiscales de Distrito, así como para crear nuevas Fiscalías Especiales, además determinará las medidas que tiendan a mejorar el sistema de procuración de justicia en la Entidad, independientemente de las atribuciones que le confiera la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

El Procurador General de Justicia del Estado, contará con una Contraloría General, cuyo titular será designado por el Gobernador del Estado.

La Contraloría General de la Procuraduría General de Justicia del Estado, tendrá por objeto la fiscalización de los recursos financieros de los órganos que lo integran, así como la sustanciación y aplicación de sanciones administrativas de los funcionarios del mismo, con excepción del Procurador General de Justicia del Estado, los Fiscales de Distrito y el Fiscal Electoral, cuyas faltas serán

denunciadas ante el Gobernador del Estado, para la substanciación del procedimiento correspondiente ante el Congreso del Estado.

Artículo 51.- El Tribunal

Tendrá las ...

I. a la V. ...

VI. Conocer de los asuntos a petición fundada del Procurador General de Justicia del Estado, que por su interés o trascendencia así lo ameriten; y

VII. ...

Artículo 53.- Para ser ...

I. a la V. ...

VI. No haber sido Secretario de Despacho, Procurador General de Justicia del Estado, Senador, Diputado Federal, Diputado Local, Presidente Municipal, a menos que se separe del cargo un año antes del día de su nombramiento;

VII. a la VIII.....

Artículo 56.- La justicia

El control

Para el ...

I. De las ...

a) a la c)

Siempre que...

II. De las ...

a) a la b)

c) El Procurador General de Justicia del Estado, en contra de leyes expedidas por el Congreso del Estado;

d) El equivalente

Las resoluciones

III. De las acciones ...

a) a la d). ...

La resolución ...

IV. A efecto ...

Artículo 71.- Podrán ser sujetos de juicio político: El Gobernador del Estado, los Diputados Locales, los Magistrados y los Consejeros de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado, los Secretarios de Despacho, el Procurador General de Justicia del Estado, el Fiscal Electoral, los Fiscales de Distrito, el Presidente de la Comisión de Fiscalización Electoral, los Coordinadores Generales, los Presidentes Municipales, los Consejeros Electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, los Directores Generales o sus equivalentes de los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal, Fideicomisos Públicos y el Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos.

Cuando ...

Para ...

En conocimiento...

Las sanciones

Artículo 72.- Cuando se trate de actos u omisiones sancionados por la Ley Penal cometidos por el Gobernador del Estado, por los Diputados Locales, por los Magistrados y Consejeros de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por los Secretarios y Subsecretarios de Despacho, por el Procurador General de Justicia del Estado, Fiscales de Distrito y el Fiscal Electoral, el Presidente de la Comisión de Fiscalización Electoral; los Coordinadores Generales, los Presidentes, Síndicos y Regidores Municipales, el Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, los Directores Generales o sus equivalentes de los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal y de Fideicomisos Públicos, el Congreso del Estado o en su caso la Comisión Permanente, erigidos en jurado declarará por dos tercios de los votos de sus miembros presentes, cuando se trate del Gobernador y por mayoría relativa cuando se trate de los otros servidores públicos enunciados en este precepto, si ha lugar o no a formación de causa. En caso afirmativo, quedará el acusado por ese sólo hecho, separado de su encargo y sujeto a la acción de los tribunales del orden común; si ésta culmina en sentencia absolutoria el inculcado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto. En caso negativo, no habrá lugar a procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculcado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.

Cuando el

Las sanciones ...

Las sanciones económicas...

En demandas ...

Artículo 79.- El Gobernador, los Magistrados, el Procurador General de Justicia del Estado, los Fiscales de Distrito, el Fiscal Electoral, los fiscales Especializados y Especiales, los Agentes del Ministerio Público, el Presidente de la Comisión de Fiscalización Electoral, los Jueces de Primera Instancia, los Presidentes Municipales, los Secretarios y Subsecretarios del Despacho, los Secretarios y Actuarios del Poder Judicial del Estado, los Funcionarios y Delegados del Registro Público de la Propiedad, así como el Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, no podrán fungir como árbitros, ni ejercer la abogacía, ni la procuración, sino cuando se trate de sus propios derechos o de los correspondientes a personas que estén bajo su patria potestad o vínculo matrimonial. Tampoco podrán ejercer el notariado, ni ser albaceas, depositarios judiciales, síndicos, administradores, interventores de concursos, testamentarios o intestados. La infracción de este artículo será causa de responsabilidad. Esta prohibición comprende a funcionarios y empleados, de los enumerados, que no estén en ejercicio de sus funciones por hallarse disfrutando de licencia.

Cuando en...

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo Segundo.- Se cambia la denominación de Ministerio de Justicia y de Ministro de Justicia, por la de Procuraduría General de Justicia del Estado y Procurador General de Justicia, respectivamente.

Artículo Tercero.- Se cambia la denominación de Secretaría de Gobierno por la de Secretaría General de Gobierno, por lo tanto a su titular se le nombrará como Secretario General de Gobierno.

Artículo Cuarto.- El Ministro de Justicia continuará ejerciendo sus facultades, como Procurador General de Justicia del Estado, por el término de siete años para el que fue nombrado, pudiendo ser reelecto para otro período inmediato.

Artículo Quinto.- Dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la publicación de la presente reforma, se llevarán a cabo las modificaciones necesarias para adecuar los ordenamientos jurídicos respectivos, de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Secretaría General de Gobierno, al presente Decreto, hasta en tanto, seguirán vigentes todas aquellas disposiciones que no contravengan el presente Decreto.

Artículo Sexto.- En cuanto cobra vigencia lo señalado en el artículo transitorio anterior, las referencias al Ministerio de Justicia del Estado y al Ministro de Justicia que se hagan en la presente Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia del Estado y demás leyes secundarias, se entenderán atribuidas a la Procuraduría General de Justicia del Estado y al Procurador General de Justicia respectivamente.

Igualmente, la referencia que se hace en la presente reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se entenderá hecha a la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia del Estado.

Artículo Séptimo.- Los asuntos que se encuentren en trámite por el Ministerio de Justicia del Estado, continuarán siendo desahogados y concluidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través de los mismos órganos que se iniciaron, previa razón que se asiente en cada uno de los expedientes con motivo de la presente reforma.

Artículo Octavo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este Decreto.

Artículos Transitorios

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chiapas; al Poder Ejecutivo, para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, a efecto de dar cumplimiento a la fracción II del artículo 83 de la Constitución Política del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se Instruye a la Secretaria de Servicios Parlamentarios para agotar el trámite correspondiente, procediéndose de inmediato a remitir a los Ayuntamientos de los 118 Municipios de la Entidad, la Minuta Proyecto de Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chiapas;

ARTÍCULO TERCERO.- Una vez recibidas las actas de cabildo relativas a la Minuta Proyecto de decreto, en términos de lo dispuesto por la fracción III, del artículo 83 de la Constitución Política del Estado; esta Honorable Asamblea instruye a la Secretaria de la Mesa Directiva a efecto de que verifique el sentido de la votación de los Ayuntamientos que den respuesta a la misma y se proponga la declaratoria correspondiente.

Dado en el salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 30 días del mes de Diciembre de dos mil ocho.-D. P. C. Sami David David.- D. S. C. O. Magdalena Torres Abarca.- Rúbricas.

De conformidad con la fracción I del artículo 42 de la Constitución Política Local y para su observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil ocho.

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado.- Noé Castañón León, Secretario General de Gobierno.- Rúbricas.

**Secretaría de Gobierno
Dirección de Asuntos Jurídicos
Departamento de Gobernación**

Decreto Número 025

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber: Que la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado, se ha servido dirigir al Ejecutivo a su cargo el siguiente:

Decreto Número 025

La Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución Política Local; y,

Considerando

La fracción I, del artículo 29 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, faculta al Honorable Congreso del Estado, a legislar en las materias que no estén reservadas al Congreso de la Unión, así como, en aquellas en que existan facultades concurrentes, conforme a leyes federales.

Que el Ejecutivo Estatal, comprometido con la conservación de los recursos naturales con que cuenta el Estado, responde al llamado que hace el Ejecutivo Federal para la protección del medio ambiente, principalmente en las Entidades que como la nuestra, que viven o dependen directamente de los recursos naturales, aprovechando éstos de los bosques, selvas, agua y aire; se une a los grandes desafíos que emprenderá el país para el futuro, en la búsqueda de energías alternativas, renovables y biocombustibles, demostrando una vez más que Chiapas cuenta con las condiciones para responder a estos requerimientos.

En ese contexto, y acorde con la política ambientalista del Gobierno Federal, en la Entidad se camina en el sentido correcto y se tiene la oportunidad de hacer bien las cosas y demostrar que el cuidado del medio ambiente, no sólo es posible, sino que es una opción viable para lograr el desarrollo económico y social que se requiere y será el motor del desarrollo industrial y comercial que tanta falta le hacen al Estado.

No pudiendo ser completo este desarrollo, sin la protección del medio ambiente, con su entorno ecológico, creando conciencia y generando un desarrollo pleno sin agredir el entorno y con respeto irrestricto a la ecología, son una garantía total, para un buen desarrollo sustentable y sostenido.

Por lo anterior, resulta imprescindible instituir a un organismo que sustituya al Instituto de Bioenergéticos y Energías Alternativas del Estado de Chiapas, ahora como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, modificando su naturaleza jurídica, así como sus atribuciones y su denominación, para crear el Instituto de Energías Alternativas, Renovables y Biocombustibles del Estado de Chiapas, que tendrá por objeto fomentar el desarrollo industrial y comercial de los insumos bioenergéticos y aquellos otros obtenidos del uso, aplicación y transformación de las energías alternativas, renovables y biocombustibles, para lograr una autosuficiencia energética y una cultura de conservación de recursos no renovables y uso de tecnología y productos limpios no contaminantes y de impacto positivo al medio ambiente.

Para efectos de formalizar lo anterior, se instituye al Instituto de Energías Alternativas, Renovables y Biocombustibles del Estado de Chiapas, como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur, con personalidad jurídica y patrimonio propio para el cumplimiento de su objeto, mismo que atenderá los asuntos que este instrumento y la demás normatividad aplicable le señalen.

Por las consideraciones antes expuestas, el Honorable Congreso del Estado de Chiapas, ha tenido a bien emitir el siguiente Decreto de:

LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS, RENOVABLES Y BIOCOMBUSTIBLES DEL ESTADO DE CHIAPAS

CAPÍTULO I DE SU CREACIÓN Y DOMICILIO

Artículo 1.- Por la presente Ley Orgánica, se crea el Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Instituto de Energías Alternativas, Renovables y Biocombustibles del Estado de Chiapas, en adelante el «Instituto», sectorizado a la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur; rigiendo sus actividades por las disposiciones de esta Ley, su Reglamento Interior; la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas y demás disposiciones legales que le sean aplicables.

Artículo 2.- El «Instituto» tendrá su domicilio legal en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en donde establecerá su oficina principal, pudiendo establecer otras oficinas alternas en los diversos Municipios del Estado, así como en cualquier Ciudad del interior del país, para el cumplimiento de su objeto.

CAPÍTULO II DE SU OBJETO Y ATRIBUCIONES GENERALES

Artículo 3.- El «Instituto» tendrá como objeto fundamental fomentar el desarrollo industrial y comercial de los insumos bioenergéticos y aquellos otros obtenidos del uso, aplicación y transformación de las energías alternativas, renovables y biocombustibles, para lograr una autosuficiencia energética y una cultura de conservación de recursos no renovables y uso de tecnología y productos limpios no contaminantes y de impacto positivo al medio ambiente.

Artículo 4.- Para el logro de sus objetivos, el «Instituto» tendrá como atribuciones generales, entre otras, las siguientes:

- I. Diseñar, formular y ejecutar los proyectos y programas para impulsar el desarrollo industrial y comercial de los insumos bioenergéticos y aquellos otros obtenidos del uso, aplicación y transformación de las energías alternativas, renovables y biocombustibles.
- II. Promover la integración y la operación de foros consultivos multidisciplinarios para el fomento y desarrollo industrial y comercial de los insumos bioenergéticos y aquellos otros obtenidos del uso, aplicación y transformación de las energías alternativas, renovables y biocombustibles.
- III. Crear nuevos esquemas de financiamiento con la participación de la iniciativa privada y de los productores en proyectos detonantes para la industrialización y comercialización de los bioenergéticos y de las energías alternativas, renovables y biocombustibles.
- IV. Planear, programar y participar en la prestación de servicios de enseñanza, organización y capacitación para la comercialización e industrialización de los bioenergéticos y de las energías alternativas, renovables y biocombustibles.

- V. Coordinar acciones entre el Gobierno Federal, otras Entidades Federativas, el Distrito Federal, los Municipios, así como la concurrencia con los Sectores Social y Privado, para el desarrollo en la industrialización y comercialización de los bioenergéticos y de las energías alternativas, renovables y biocombustibles.
- VI. Fomentar e implantar el uso de tecnologías eficientes para la industrialización y comercialización para la producción, el almacenamiento y comercialización de bioenergéticos y de las energías alternativas, renovables y biocombustibles.
- VII. Coordinar la elaboración de los bioenergéticos en las plantas procesadoras que se instalen en el Estado; así como en la producción de las energías alternativas, renovables y biocombustibles que por cualquier medio se aprovechen en beneficio de los habitantes del Estado.
- VIII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y demás normatividad que le resulte aplicable, así como las que le otorgue expresamente el Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

En el Reglamento Interior del «Instituto», se definirá de manera particular el funcionamiento de éste, así como, sus demás atribuciones.

CAPÍTULO III DE LA INTEGRACIÓN DE SU PATRIMONIO

Artículo 5.- El patrimonio del «Instituto», se integrará entre otros, con los bienes muebles e inmuebles y los recursos que le sean asignados por los Ejecutivos Federal y Estatal de conformidad con las asignaciones presupuestales correspondientes.

Los bienes muebles e inmuebles y los recursos asignados para el fin referido en el párrafo que antecede, serán inalienables, inembargables e imprescriptibles; consecuentemente, sobre ellos no podrá constituirse gravamen de ninguna naturaleza, sin embargo, de estos bienes podrá percibir ingresos provenientes de actividades derivados del uso de los mismos.

Artículo 6.- También formarán parte del patrimonio del «Instituto», los siguientes:

- I. Los bienes, derechos y obligaciones pertenecientes al Instituto de Bioenergéticos y Energías Alternativas del Estado de Chiapas.
- II. Los bienes muebles e inmuebles que le sean propios y los que los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal le destinen.
- III. Los subsidios, subvenciones, aportaciones y demás ingresos provenientes del gobierno estatal o que éste, específicamente destine para el cumplimiento de sus objetivos.
- IV. Las aportaciones, donaciones y legados que reciba de instituciones públicas o personas físicas o morales.
- V. Los rendimientos y recuperaciones que obtenga de la inversión de los recursos a que se refieren las fracciones anteriores, así como los bienes o recursos que por cualquier otro título adquiera.
- VI. En general, todos los derechos y obligaciones del sistema que entrañen utilidad económica y sean susceptibles de estimación pecuniaria.

CAPÍTULO IV DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL INSTITUTO

Artículo 7.- Los Órganos de Gobierno del Instituto, son:

- I. La Junta de Gobierno.
- II. La Dirección General.

CAPÍTULO V DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Artículo 8.- La Junta de Gobierno es el Órgano Supremo de Gobierno del «Instituto», responsable de fijar las políticas, programas, objetivos y metas del organismo, así como, de evaluar sus resultados operativos, administrativos, financieros y en general, el desarrollo de sus actividades.

Artículo 9.- La Junta de Gobierno del Instituto se integrará por:

- I. Un Presidente, que será el Titular de la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur.
- II. Un Secretario Técnico, que será el funcionario del «Instituto», que determine la propia Junta de Gobierno.
- III. Tres Vocales, que serán:
 - a).- El Secretario de Hacienda.
 - b).- El Secretario de Medio Ambiente y Vivienda.
 - c).- El Secretario del Campo.

Los integrantes de la Junta de Gobierno, contarán con voz y voto, y podrán designar a un representante con cargo mínimo de Director o su equivalente, debidamente acreditado por éstos ante la propia Junta, quienes contarán también con voz y voto.

Artículo 10.- El Presidente de la Junta de Gobierno del «Instituto», podrá invitar a las sesiones de la misma, cuando así lo considere necesario, a los representantes de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, a los representantes de las instituciones públicas; así como, a los representantes del sector social y privado, cuyas actividades estén relacionadas con el objetivo de este organismo, quienes tendrán únicamente voz.

Los cargos a que alude este artículo son honoríficos, las personas que los desempeñen, no devengarán salario o compensación alguna.

Artículo 11.- La Junta de Gobierno del «Instituto», celebrará sesiones ordinarias trimestralmente y extraordinarias cuando así lo determine el Presidente o lo solicite cualquiera de los miembros.

El quórum para sesionar, se formará con el cincuenta por ciento más uno de sus integrantes.

Artículo 12.- Las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno se celebrarán previa convocatoria girada a sus miembros, cuando menos con cinco días de anticipación y las extraordinarias con 24 horas de anticipación.

Artículo 13.- Los acuerdos y resoluciones emitidos en el seno de la Junta de Gobierno serán ejecutados por la Dirección General del «Instituto».

Artículo 14.- Son atribuciones de la Junta de Gobierno del «Instituto»:

- I. Establecer y aprobar los programas y políticas generales de trabajo que anualmente le sean presentados por la Dirección General, que orienten las actividades del «Instituto», definiendo las prioridades a las que debe sujetarse.
- II. Aprobar los proyectos y planes para el desarrollo de las funciones del «Instituto», encaminados al posicionamiento de desarrollo industrial y comercial de los insumos bioenergéticos y aquellos otros obtenidos del uso, aplicación y transformación de las energías alternativas, renovables y biocombustibles.
- III. Aprobar los estados financieros y presupuesto anual; así como, los informes generales y especiales que rinda la Dirección General del «Instituto».
- IV. Aprobar la celebración que realice la Dirección General, de convenios, contratos o acuerdos con terceros en materia de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios, que sean necesarios para el buen funcionamiento del «Instituto».
- V. Aprobar los actos jurídicos que celebre la Dirección General, que impliquen traslación de dominio, aceptación y remisión de obligaciones patrimoniales, necesarias para lograr los objetivos del «Instituto».
- VI. Aprobar los manuales y Reglamento Interior del «Instituto», remitiendo este último al Ejecutivo Estatal para su publicación correspondiente.
- VII. Aprobar el organigrama del «Instituto», y las modificaciones que se estimen necesarias.
- VIII. Las demás que se deriven de la presente Ley y de los ordenamientos correspondientes.

Artículo 15.- Serán facultades y obligaciones del Secretario Técnico:

- I. Fungir como Secretario de la Junta de Gobierno.
- II. Convocar por instrucciones del Presidente, a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno.
- III. Llevar el libro de asistencias y levantar las actas de las sesiones que se efectúen, redactando los acuerdos que se tomen.

- IV. Asesorar a la Junta de Gobierno en sus funciones ordinarias.
- V. Vigilar la ejecución de los acuerdos de la Junta de Gobierno.
- VI. Todas aquellas que la Junta de Gobierno le encomiende en cumplimiento de la presente Ley.

CAPÍTULO VI DEL DIRECTOR GENERAL

Artículo 16.- El Director General del «Instituto», será nombrado y removido libremente por el Gobernador del Estado y para la ejecución de los fines de este organismo, contará con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios.

El Director General del «Instituto», participará en las sesiones de la Junta de Gobierno, contando con derecho a voz, pero no a voto.

Artículo 17.- El Director General del «Instituto», tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Dirigir las funciones y acciones del «Instituto», vigilando y evaluando la ejecución de las mismas y representarlo legalmente en calidad de apoderado general para pleitos y cobranzas y actos de administración, con cláusula general y las especiales que lo requieran, conforme a la Ley. Salvo en aquellos actos jurídicos que impliquen traslación de dominio, aceptación y remisión de obligaciones patrimoniales, las que se sujetarán a la aprobación expresa de la Junta de Gobierno.
- II. Formular y someter a la aprobación de la Junta de Gobierno, los programas y proyectos presupuestados para cada ejercicio anual del «Instituto» diseñando los manuales administrativos y controles internos que lo regulen.
- III. Formular y someter a la aprobación de la Junta de Gobierno los estados financieros trimestrales e informes generales y especiales del «Instituto».
- IV. Presentar ante la Junta de Gobierno, para su aprobación correspondiente, los manuales de operación y el Reglamento Interno del «Instituto».
- V. Proponer ante la Junta de Gobierno, las políticas en materia de industrialización y comercialización de los bioenergéticos y de las energías alternativas, renovables y biocombustibles.
- VI. Nombrar, remover y reubicar al personal técnico y administrativo del «Instituto», distribuyendo el trabajo y determinando sus atribuciones y retribuciones conforme a las asignaciones globales del presupuesto aprobadas.
- VII. Ejecutar las acciones, políticas públicas, procedimientos, programas y demás acciones que le encomiende la Junta de Gobierno, relativas a la industrialización y comercialización de los bioenergéticos y de las energías alternativas, renovables y biocombustibles.
- VIII. Coordinarse con las Dependencias, Entidades y Unidades Administrativas del Poder Ejecutivo, para llevar a cabo las acciones correspondientes al cumplimiento del objeto del «Instituto».

- IX. Planear, dirigir y evaluar el funcionamiento del «Instituto» y ejecutar los programas y proyectos que a éste le correspondan.
- X. Formular los programas de organización y las políticas generales y específicas a que deberá sujetarse el «Instituto», en el ejercicio de sus funciones.
- XI. Otorgar, sustituir y revocar poderes generales y especiales para pleitos y cobranzas y actos de administración, con las facultades que les competan, entre ellas las que requieran autorización o cláusula especial, pero cuando sean a favor de personas ajenas al «Instituto», deberá solicitar la aprobación de la Junta de Gobierno.
- XII. Suscribir y celebrar, en representación del «Instituto», toda clase de actos jurídicos y administrativos, contratos y convenios que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto.
- XIII. Rendir a la Junta de Gobierno, un informe anual de la situación financiera que guarda el «Instituto», así como de las labores desarrolladas.
- XIV. Organizar, administrar y conducir con niveles de calidad y excelencia al «Instituto», para el pleno cumplimiento de su objetivo y atribuciones.
- XV. Todas aquellas que la Junta de Gobierno le encomiende en cumplimiento de la presente Ley y su Reglamento.

CAPÍTULO VI DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA

Artículo 18.- El «Instituto» contará con un órgano permanente de vigilancia, a cargo de un Comisario Público propietario y un suplente, que serán designados por la Secretaría de la Función Pública.

El Comisario participará en las sesiones de la Junta de Gobierno con derecho a voz pero sin voto.

Artículo 19.- El Comisario evaluará la eficiencia con la que el «Instituto» ejerza los desembolsos en los rubros de gasto corriente y de inversión, solicitará información y efectuará los actos que requiera para el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las facultades propias de la Dependencia encargada de auditoría y vigilancia del Gobierno del Estado, debiendo emitir un informe a la Junta de Gobierno para cada ejercicio fiscal.

Artículo 20.- Los órganos de administración del «Instituto» proporcionarán al comisario la información que les solicite y le prestarán las facilidades necesarias para comprobar y vigilar que las políticas, normas, procedimientos y demás disposiciones se apliquen correctamente.

Artículo 21.- El Comisario deberá elaborar las informaciones derivadas de las revisiones practicadas y proponer a la Junta de Gobierno y a la Dirección General del Instituto, las medidas tendientes a mejorar el control interno, estableciendo el seguimiento para su aplicación.

CAPÍTULO VII DE LAS RELACIONES LABORALES DEL INSTITUTO

Artículo 22.- Las relaciones de trabajo entre el Instituto y sus empleados, se regirán por la legislación laboral correspondiente.

Transitorios

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día uno de enero del año de dos mil nueve.

Artículo Segundo.- A partir de su publicación del presente Decreto en el Periódico Oficial, se derogan los Artículos Tercero, Cuarto y Quinto Transitorios, del Decreto número 254, por el que se Abroga la Ley Orgánica del Instituto de Bioenergéticos y Energías alternativas del Estado de Chiapas, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 123, Tomo III, de fecha miércoles veintinueve de octubre de dos mil ocho.

Artículo Tercero.- Las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las acciones necesarias para el debido cumplimiento de la presente Ley.

Artículo Cuarto.- Los recursos humanos, materiales y financieros que forman parte del Instituto de Bioenergéticos y Energías Alternativas del Estado de Chiapas que se extinguió mediante el referido Decreto 254, serán transferidos al Instituto de Energías Alternativas, Renovables y Biocombustibles del Estado de Chiapas, que la presente Ley Orgánica crea, respetando los derechos laborales de los trabajadores en términos de las disposiciones legales aplicables, así como de la normatividad respectiva.

Artículo Quinto.- Las atribuciones y los compromisos adquiridos, así como los asuntos a cargo del Instituto de Bioenergéticos y Energías Alternativas del Estado de Chiapas que se extinguió mediante el referido Decreto 254, que a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley Orgánica se encontraban en trámite o correspondían a éste, serán asumidos y se entenderán conferidos de inmediato al Instituto de Energías Alternativas, Renovables y Biocombustibles del Estado de Chiapas.

Artículo Sexto.- Las referencias, atribuciones o menciones que hagan otros ordenamientos legales o normativos en relación con el Instituto de Bioenergéticos y Energías Alternativas del Estado de Chiapas, serán transferidas y se entenderán conferidos al Organismo Descentralizado Instituto de Energías Alternativas, Renovables y Biocombustibles del Estado de Chiapas, que se crea con el presente Decreto.

Artículo Séptimo.- El Director General del «Instituto», deberá someter a consideración de la Junta de Gobierno, en un plazo no mayor a noventa días hábiles, contados a partir de la publicación del presente Decreto, el Reglamento Interior de dicho Organismo Descentralizado, para su aprobación.

El Ejecutivo dispondrá se publique, circule y se dé el debido cumplimiento.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 30 días del mes de Diciembre de dos mil ocho.-D. P. C. Sami David David.- D. S. C. O. Magdalena Torres Abarca.- Rúbricas.

De conformidad con la fracción I del artículo 42 de la Constitución Política Local y para su observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil ocho.

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado.- Noé Castañón León, Secretario General de Gobierno.- Rubricas.

**Secretaría de Gobierno
Dirección de Asuntos Jurídicos
Departamento de Gobernación**

Decreto Número 026

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber: Que la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado, se ha servido dirigir al Ejecutivo a su cargo el siguiente:

Decreto Número 026

La Honorable Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución Política Local; y

Considerando

Que el artículo 29, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, confiere al Honorable Congreso del Estado, la atribución de legislar en todas aquellas materias que no estén reservadas al Congreso de la Unión, así como en aquellas que existan facultades concurrentes, conforme a leyes federales.

Que desde el inicio de la presente administración, se ha promovido la modernización y actualización de las Instituciones Públicas, así como el marco jurídico de actuación del Gobierno del Estado, a efecto de atender con prontitud, eficiencia y eficacia las demandas de la ciudadanía chiapaneca.

Como consecuencia, es necesario fortalecer las instituciones públicas que conforman el Gobierno del Estado, así como, definir y distribuir adecuadamente sus atribuciones y con ello, hacer expedito su actuar, además de legitimarlo conforme a la naturaleza propia de sus funciones, con el propósito de dar certidumbre a los actos que realizan, en estricto apego a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El agua, como recurso no renovable y parte del patrimonio nacional, requiere de estrategias y políticas públicas de largo alcance y mayor eficiencia, para su uso sustentable, en lo doméstico, comercial,

industrial y agropecuario; que asegure una mayor cobertura y eficiente el uso actual, preservando el recurso para las nuevas generaciones; y que además se propongan políticas y estrategias para la prevención de emergencias y desastres hidrometeorológicos.

Además, para elevar la eficiencia del Sistema Hidrológico se deberán fortalecer los organismos responsables del manejo integral de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, y se extenderá la integración del Consejo por cuencas hidrológicas.

En el mismo sentido, se requiere de una reforma tendente a establecer los mecanismos, métodos y sistemas de planeación, financiamiento, operación y normatividad que propicien el mejor aprovechamiento y conservación del recurso hídrico en el desarrollo social y económico del Estado; por lo que se hace necesario el reordenamiento de la función pública, en materia de atención, cobertura conservación y servicios de agua en sus diferentes modalidades: uso, reuso, tratamiento, saneamiento, distribución, preservación y cultura del agua; así como una mayor y más eficiente regulación, planeación, gestión, conservación y preservación de las aguas de jurisdicción estatal con fundamento en el artículo 27, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley Reglamentaria. Por todo ello, se propone la creación de un organismo globalizador y rector de las acciones, programas y proyectos, que reordenen la participación del Gobierno del Estado en lo relacionado al agua.

En ese sentido, es indispensable contar con una Institución que promueva e investigue nuevas técnicas y tecnologías del agua, que estimule el ahorro, fortalezca la cultura, el aprovechamiento y la conservación del recurso, vinculándose con sistemas de información y colaboración científica y tecnológica, con entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras que se relacionen con la materia y que promueva e impulse ante la sociedad, una amplia concientización hacia una mayor cultura del agua propiciando la creación de órganos ciudadanos que generen acciones a favor del mejor uso y aprovechamiento de la misma, fortaleciendo el derecho de los usuarios.

Ello, dará como resultado un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía administrativa, presupuestal, técnica, de gestión y de operación y para el adecuado desarrollo de sus funciones, que se denominará Instituto Estatal del Agua, el cual asesorará en lo técnico, financiero, administrativo y operativo, a los organismos operadores municipales de agua potable y coadyuvará con ellos en los programas y proyectos de agua, drenaje y saneamiento que propicien y logren la mayor racionalidad del aprovechamiento sustentable del agua, para el consumo humano, industrial y agropecuario, para el beneficio del desarrollo social y económico del Estado; así mismo, analizará en coordinación con las entidades del campo y desarrollo rural, los planes y programas hidroagrícolas para el desarrollo agropecuario sustentable del Estado.

Por las anteriores consideraciones este Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien emitir el siguiente:

DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA

Título Primero

Disposiciones Generales

Capítulo I

De la Creación, Domicilio y Personalidad Jurídica del Instituto Estatal del Agua

Artículo 1.- Se crea el Instituto Estatal del Agua, en adelante, el Instituto, como un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía administrativa, presupuestal, técnica, de gestión, de operación y de ejecución para el adecuado desarrollo de sus funciones, mismo que atenderá los asuntos que el presente Decreto, su Reglamento Interior y demás normatividad aplicable le señalen.

Artículo 2.- El Instituto tendrá su domicilio legal, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en donde establecerá su oficina principal, pudiendo instituir otras oficinas alternas en las diferentes regiones y municipios del Estado, para el cumplimiento de su objeto.

Capítulo II

De su Objeto y Atribuciones Generales

Artículo 3.- El Instituto tendrá como objeto fundamental, establecer los mecanismos, métodos y sistemas de planeación, programación, financiamiento, y operación, que propicien y logren la mayor racionalidad en el aprovechamiento sustentable del agua en el Estado, para consumo humano industrial y agropecuario, para beneficio del desarrollo social y económico del Estado.

Artículo 4.- Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las atribuciones generales siguientes:

- I. Diseñar las políticas que permitan el uso sustentable de las fuentes de abastecimiento de agua, como los manantiales, arroyos, ríos, lagos, lagunas, litorales marítimos, etcétera; así como conservar, sanear y recuperar las cuencas y microcuencas chiapanecas.
- II. Diseñar las estrategias y políticas para garantizar la infraestructura necesaria para la dotación el servicio de agua potable a todas las comunidades chiapanecas.
- III. Diseñar las estrategias y políticas para garantizar la infraestructura necesaria para el servicio del alcantarillado sanitario o letrinas ecológicas a las comunidades chiapanecas, en función a su tamaño y medio geofísico de cada una de ellas.
- IV. Validar los proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento que se elaboren para la construcción de la infraestructura con recursos estatales y municipales.
- V. Diseñar las estrategias y políticas para garantizar la infraestructura necesaria para el saneamiento de las aguas residuales que permita prever y reducir la contaminación del agua.
- VI. Fomentar y fortalecer las instancias de participación social (Organismos Operadores y Comités Comunitarios) para que se responsabilicen del buen funcionamiento de la infraestructura que se construya en el Estado, estableciendo mecanismos que permitan generar recursos económicos propios para la operación, mantenimiento, ampliación y rehabilitación.
- VII. Establecer registros de la infraestructura existente y las condiciones que guardan cada una de ellas, que permitan planear las acciones y evaluar el impacto de la inversión que se realice por los tres órdenes de Gobierno, la iniciativa privada u otros organismos.

- VIII. Promover la suscripción de Convenios o Acuerdos de Coordinación con instancias federales, municipales, iniciativa privada y fundaciones nacionales e internacionales para la suma de esfuerzos y recursos para el financiamiento de las acciones que se impulsen para el cumplimiento de la misión del Instituto Estatal del Agua.
- IX. Desarrollar proyectos de investigación, educación y capacitación especializadas de interés para otras instituciones las cuales se realizarán bajo convenios y contratos específicos.
- X. Promover la educación y la cultura en torno al agua, que fomente en la sociedad la conciencia que el líquido es un bien escaso que requiere del cuidado de su cantidad y calidad, así como de su aprovechamiento sustentable y de la mitigación de sus efectos destructivos.
- XI. Contribuir al desarrollo, difusión e implantación de aquellas tecnologías del agua que mejor se adapten a las condiciones del Estado.
- XII. Participar en la elaboración de proyectos de Normas Oficiales Mexicanas en materia del agua.
- XIII. Desarrollar y probar instrumentos de gestión integrada de recursos hídricos de diversa índole para apoyar el desarrollo del Sector Agua y coadyuvar en la solución de los problemas hídricos e hidráulicos del Estado.
- XIV. Realizar estudios y consultorías especializadas en materia de hidráulica, hidrología, control de la calidad del agua, de gestión integrada de los recursos hídricos.
- XV. Proponer orientaciones y contenidos para la política nacional hídrica y el programa nacional hídrico, y encabezar los trabajos de planificación e instrumentación de programas y acciones para la investigación científica y desarrollo tecnológico en materia de agua y su gestión, así como para la formación y capacitación de recursos humanos en las mismas materias.
- XVI. Sistematizar y publicar la información técnica asociada con los recursos hídricos del Estado.
- XVII. Certificar los laboratorios de calidad del agua, los dispositivos para medición del agua en cantidad, y los equipos, instrumentos y enseres que faciliten la elevación de las eficiencias en la explotación, uso o aprovechamiento del agua en términos de Ley.
- XVIII. Las demás que le señale el presente Decreto, el Reglamento Interior del Instituto y demás normatividad que le resulte aplicable, así como las que le instruya el Titular del Poder Ejecutivo y que tiendan a lograr el cumplimiento de su objeto.

Capítulo III **De la Integración de su Patrimonio**

Artículo 5.- Para su funcionamiento, el Instituto contará con los bienes muebles e inmuebles destinados para el cumplimiento de sus atribuciones, así como con los recursos que les sean asignados por el Titular del Ejecutivo del Estado, de conformidad con las asignaciones presupuestales correspondientes.

Artículo 6.- El Instituto contará con patrimonio propio que estará integrado por:

- I. Los recursos estatales previstos en las disposiciones presupuestales correspondientes para la aplicación de sus programas, proyectos y acciones que le están encomendadas al Instituto de acuerdo a su objeto.
- II. Los bienes muebles, inmuebles y derechos que por cualquier Título adquiera, o los que en el futuro aporten la Federación, el Estado, los Municipios y otras instituciones u organismos públicos y privados, personas físicas o morales, nacionales o extranjeras.
- III. Las transferencias, aportaciones en dinero, bienes, subsidios, financiamientos, estímulos y prestaciones que reciba del Gobierno Federal, Estatal y municipal, y los que obtenga de las demás instituciones públicas o privadas o personas físicas o morales.
- IV. Los rendimientos, utilidades, dividendos, intereses, frutos, concesiones, permisos, productos y los aprovechamientos que obtenga por las operaciones que realice o que le correspondan por cualquier título legal.
- V. Los beneficios que obtenga de la enajenación de bienes de su patrimonio.
- VI. Los ingresos que perciba por los servicios que proporcione.
- VII. Los recursos derivados de fideicomisos en los que se le señale como beneficiario.
- VIII. Cualquier otra percepción de la cual el organismo resulte beneficiario.

Capítulo IV De la Integración del Instituto

Artículo 7.- Para el ejercicio de sus atribuciones, el Instituto contará con los órganos siguientes:

- I. La Junta de Gobierno.
- II. La Dirección General.
- III. Un Comisario Público.
- IV. Un Consejo Consultivo del Agua del Estado de Chiapas.

El Instituto, se auxiliará de la estructura orgánica y plantilla de plazas que apruebe la Junta de Gobierno, con base a las necesidades y disponibilidad presupuestal existente, misma que con sus atribuciones se determinarán en su Reglamento Interior.

Artículo 8.- La Junta de Gobierno es el Órgano Supremo del Instituto, será la instancia responsable de establecer las políticas, objetivos y metas del Instituto, evaluando sus resultados y el desarrollo de sus actividades.

Artículo 9.- Cada integrante de la Junta de Gobierno, contará con voz y voto y podrá designar a un suplente para que lo represente en las sesiones de la Junta de Gobierno, quien tendrá las mismas facultades de éste, y deberá tener nivel jerárquico inmediato inferior, debiendo estar debidamente acreditado mediante oficio dirigido a la Junta de Gobierno.

Los cargos a que se refieren las fracciones del artículo 13, así como los suplentes tendrán el carácter de honoríficos y las personas que lo desempeñen no devengarán salario o compensación alguna.

El Director General podrá participar en todas las sesiones de la Junta de Gobierno, y contará con derecho a voz pero sin voto.

Artículo 10.- La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos cada tres meses; y extraordinarias cuantas veces sea necesaria, y así lo convoque el Presidente de la Junta o a solicitud del Director General, a través del Secretario Técnico, por instrucciones de éstos.

La Junta de Gobierno, a través del Secretario Técnico, podrá invitar a las sesiones de ésta, cuando así lo considere necesario, a cualquier representante de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública federal, estatal, municipal, de instituciones públicas del sector social y privado, siempre que sus actividades estén relacionadas con el objeto del Instituto, los cuales tendrán derecho a voz pero no a voto, en las sesiones en que participen como invitados.

Artículo 11.- Las sesiones y los acuerdos que tome la Junta de Gobierno serán válidos con la participación de más de la mitad del número total de sus integrantes.

Artículo 12.- Los acuerdos y resoluciones emitidos por la Junta de Gobierno, se aprobarán por la mayoría de votos de los miembros presentes y serán ejecutados por la Dirección General. En caso de empate, tendrá voto de calidad el Presidente de la Junta de Gobierno o su suplente.

Capítulo V De la Integración y Atribuciones de la Junta de Gobierno

Artículo 13.- La Junta de Gobierno del Instituto se integrará por:

- I. Un Presidente, que será el Secretario de Infraestructura.
- II. Un Secretario Técnico, que será el Coordinador de Administración y Finanzas del Instituto.
- III. Los vocales que serán:
 - a).- El Titular de la Secretaría de Hacienda.

b).- El Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda.

c).- El Titular de la Secretaría del Campo.

Artículo 14.- La Junta de Gobierno tendrá entre otras, las siguientes atribuciones:

- I. Establecer y aprobar los programas y políticas generales de trabajo que anualmente le sean presentados por la Dirección General y que orienten las actividades del Instituto, definiendo las prioridades a las que debe sujetarse.
- II. Aprobar el Presupuesto Anual de Egresos y la estimación de ingresos que someta a su consideración la Dirección General, así como sus modificaciones, en términos de la legislación aplicable.
- III. Analizar y aprobar en su caso, el balance anual y los estados financieros, así como, los informes generales y especiales que rinda la Dirección General.
- IV. Vigilar el cumplimiento de los programas y el ejercicio del presupuesto anual de egresos, supervisando el avance de las actividades y el apego a la normatividad aplicable.
- V. Aprobar los actos jurídicos que celebre la Dirección General, que impliquen traslación de dominio, aceptación y remisión de obligaciones patrimoniales, necesarias para cumplir con los objetivos del Instituto.
- VI. Aprobar el proyecto de Reglamento Interior del Instituto, así como sus modificaciones, y remitirlo a consideración del Titular del Poder Ejecutivo para la aprobación y en su caso, expedición y publicación correspondientes.
- VII. Aprobar los manuales, la estructura organizacional del Instituto, así como la creación o supresión de los órganos que lo integran, de conformidad con la normatividad aplicable vigente y a las necesidades y disponibilidad presupuestal. En todos los casos deberá sujetarse a lo que establezca la Dependencia normativa competente.
- VIII. Vigilar la buena marcha del Instituto, en todos los ámbitos de su actividad e instruir medidas para mejorar su funcionamiento.
- IX. Analizar y establecer medidas de solución a los problemas inherentes a las funciones del Instituto, que por su importancia someta a su consideración el Director General.
- X. Autorizar la contratación de despachos contables externos, para dictaminar los estados financieros del Instituto, y en su caso, aprobarlos.
- XI. Fijar las reglas generales a las que deberá sujetarse el Instituto, en la celebración de acuerdos, convenios y contratos con Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, así como, con los organismos del sector público, privado y social, nacionales o extranjeros, para la ejecución de acciones y programas correspondientes al cumplimiento del objeto de creación del organismo.

- XII. Vigilar el exacto cumplimiento de este Decreto y demás normas aplicables, pudiendo al efecto solicitar a las autoridades competentes la observancia de las obligaciones que les resulten.
- XIII. Resolver los casos no previstos en el presente Decreto, mediante Acuerdo que emita, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
- XIV. Autorizar la creación de comités o subcomités de apoyo.
- XV. Las demás que le señale el presente Decreto, su Reglamento Interior y los ordenamientos jurídicos o administrativos que le resulten aplicables.

Capítulo VI De las Atribuciones de los Integrantes de la Junta de Gobierno

Artículo 15.- El Presidente de la Junta de Gobierno, tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebre la Junta de Gobierno, con derecho a voz y voto.
- II. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias.
- III. Emitir en caso de empate su voto de calidad.
- IV. Suscribir las actas de sesiones, resoluciones y acuerdos de la Junta de Gobierno.
- V. Instruir al Secretario Técnico, la elaboración de las convocatorias y actas del orden del día para las sesiones ordinarias y extraordinarias.
- VI. Acordar con el Secretario Técnico, los asuntos a tratar en cada sesión de la Junta de Gobierno.
- VII. Representar legalmente a la Junta de Gobierno ante toda clase de autoridades, organismos, instituciones y personas públicas o privadas, nacionales e internacionales.
- VIII. Las demás que le asigne la Junta de Gobierno.

Artículo 16.- El Secretario Técnico, tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Realizar el seguimiento a las resoluciones y acuerdos que se tomen en las sesiones de la Junta de Gobierno.
- II. Convocar, por instrucciones de la Junta de Gobierno, a las sesiones ordinarias y extraordinarias.
- III. Asistir y participar en las sesiones de la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero sin voto.
- IV. Dar lectura textual, levantar y elaborar el acta respectiva de las sesiones de la Junta de Gobierno, además de recabar toda la documentación soporte de la misma, cuando así se requiera.

- V. Formalizar las invitaciones y elaborar el orden del día de las sesiones de la Junta de Gobierno.
- VI. Circular con oportunidad entre los miembros de la Junta de Gobierno, las actas de sesiones, el orden del día y la documentación que se deba conocer en las sesiones correspondientes.
- VII. Registrar y firmar las actas, minutas de trabajos y acuerdos; además de darle puntual seguimiento a las mismas.
- VIII. Informar a los miembros de la Junta de Gobierno, los avances y resultados obtenidos en las sesiones realizadas.
- IX. Registrar el control de asistencia de los miembros de la Junta de Gobierno.
- X. Recibir y encauzar las propuestas que se dirijan a la Junta de Gobierno, sometiéndolos, en su caso, a consideración de ésta.
- XI. Resguardar las actas de cada una de las sesiones de la Junta de Gobierno, anexando además, el soporte documental correspondiente.
- XII. Suscribir los documentos que emita la Junta de Gobierno y la correspondencia de ésta.
- XIII. Las demás que le asigne la Junta de Gobierno en cumplimiento del presente Decreto, y demás normatividad que le resulte aplicable.

Artículo 17.- Los vocales de la Junta de Gobierno tendrán las siguientes atribuciones:

- I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno, con derecho a voz y voto.
- II. Suscribir los acuerdos, actas, resoluciones y decisiones de la Junta de Gobierno.
- III. Solicitar por escrito la incorporación de asuntos generales en el orden de día de las sesiones de la Junta de Gobierno.
- IV. Conocer de los asuntos que le sean sometidos para su aprobación por la Junta de Gobierno.
- V. Las demás que le asigne la Junta de Gobierno en cumplimiento al presente Decreto y demás normatividad que le resulte aplicable.

Capítulo VII

De las Atribuciones del Director General

Artículo 18.- El Director General será nombrado y removido libremente por el Titular del Poder Ejecutivo, y tendrá a su cargo la administración y representación del Instituto.

Artículo 19.- El Director General tendrá entre otras, las siguientes atribuciones:

- I. Representar legalmente al Instituto, ante toda clase de autoridades, organismos, instituciones y personas públicas o privadas, nacionales e internacionales.

La representación a que se refiere esta fracción, comprende el ejercicio de todo tipo de acciones y constituye una representación amplísima.

- II. Formular y someter a la aprobación de la Junta de Gobierno, los programas institucionales del Instituto, y ejecutar éstos una vez que sean aprobados.
- III. Formular los programas, así como el proyecto de Reglamento Interior y los manuales del Instituto, y sus modificaciones, sometiéndolos a consideración de la Junta de Gobierno.
- IV. Administrar y realizar las tareas operativas del Instituto, implementando las acciones necesarias para su buen funcionamiento.
- V. Proponer para aprobación de la Junta de Gobierno, los programas y proyectos presupuestados para cada ejercicio anual, así como, los estados financieros, e informes generales y especiales del Instituto.
- VI. Otorgar, sustituir y revocar toda clase de poderes, de conformidad con la legislación vigente.
- VII. Informar a la Junta de Gobierno, los avances en los programas, acciones, políticas y proyectos que lleve a cabo el Instituto.
- VIII. Concurrir a las sesiones de la Junta Directiva, participando en ellas, con voz pero sin voto, y cumplir y hacer cumplir las disposiciones generales y los acuerdos emitidos por ésta.
- IX. Celebrar y suscribir toda clase de actos jurídicos y administrativos, contratos y convenios en representación del Instituto, que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto, informando periódicamente a la Junta de Gobierno, sobre el resultado de los mismos.
- X. Conducir las relaciones laborales del personal del Instituto, conforme a la legislación que resulte aplicable.
- XI. Conocer y resolver los asuntos de carácter administrativo y laboral relacionados con la administración de recursos humanos, financieros y materiales del Instituto.
- XII. Nombrar y remover al personal del Instituto, con base en el presupuesto autorizado, necesidades que se generen, para el cumplimiento de los objetivos y de conformidad con la legislación aplicable.
- XIII. Otorgar permisos y licencias, con y sin goce de sueldo, al personal del Instituto, y a quienes los sustituyan provisionalmente; así como, aplicar e imponer las sanciones que corresponda en términos de las disposiciones reglamentarias conducentes.

- XIV. Para los efectos administrativos a que haya lugar, certificar, en su caso, la documentación propia del Instituto, así como toda aquella que obre en los archivos del mismo.
- XV. Solicitar al Comisario, el examen y evaluación de los sistemas, mecanismos y procedimientos de control del Instituto, así como solicitar la revisión y auditorías de índole administrativas, contables, operacionales, técnicas y jurídicas a las autoridades competentes, con la finalidad de vigilar y transparentar el manejo y la aplicación de los recursos públicos.
- XVI. Suscribir toda clase de contratos de trabajo, en representación del Instituto.
- XVII. Delegar en servidores públicos subalternos, las atribuciones que le corresponden, excepto aquellas que su ejercicio sea personalísimo, por su naturaleza indelegable.
- XVIII. Presentar a la Junta de Gobierno, los informes relacionados con las actividades del Instituto.
- XIX. Ejecutar los acuerdos y resoluciones que dicte la Junta de Gobierno.
- XX. Las demás que en el ámbito de su competencia le asignen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás ordenamientos aplicables, así como, las que le confiera la Junta de Gobierno.

Capítulo VIII Del Órgano de Vigilancia

Artículo 20.- El Instituto contará con un órgano permanente de vigilancia, a cargo de un Comisario Público, que será nombrado y removido libremente por la Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo del Estado, en términos de la legislación aplicable, quien deberá llevar a cabo las funciones de vigilancia y control interno.

El Comisario evaluará la eficiencia y transparencia con la que el Instituto, maneje y aplique los recursos públicos conforme a las disposiciones aplicables, solicitará información y efectuará los actos que requiera para el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las facultades que le corresponden a la Secretaría de la Función Pública, debiendo emitir un informe a la Dirección General y la Junta de Gobierno, en cada sesión ordinaria.

El Comisario participará en las sesiones de la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero sin voto.

Artículo 21.- Los órganos administrativos del Instituto proporcionarán al comisario la información que les solicite y le prestarán las facilidades necesarias para comprobar y vigilar que las políticas, normas, procedimientos y demás disposiciones se apliquen correctamente.

El comisario deberá elaborar los informes derivados de las revisiones practicadas y proponer a la Dirección General, las medidas preventivas y correctivas tendentes a mejorar la organización, funcionamiento y control interno del Instituto, estableciendo el seguimiento para su aplicación, por lo

que, en todo caso, deberá dirigir sus acciones en apoyo a la función directiva y promover el mejoramiento de gestión del organismo.

**Capítulo IX
De las Reglas de Gestión y
De las Relaciones Laborales**

Artículo 22.- El Instituto queda sometido a las reglas de contabilidad, presupuesto y gasto público aplicables a la Administración Pública Estatal, de conformidad con lo establecido por el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.

Artículo 23.- Los planes y programas que lleve a cabo el Instituto, en el ejercicio de sus funciones, deberán ser acordes con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo.

Artículo 24.- El régimen laboral a que se sujetarán las relaciones de trabajo del Instituto, se ajustarán a lo dispuesto en el Apartado «A» del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley Reglamentaria.

**Título Segundo
Del Consejo Consultivo
del Agua del Estado de Chiapas
Capítulo Único
De su Integración y Atribuciones**

Artículo 25.- El Consejo Consultivo del Agua del Estado de Chiapas, es un órgano de apoyo y consulta del Instituto, de carácter institucional, social, ciudadano y honorífico, que estará integrado por un Presidente y cinco Vocales los que no percibirán retribución, compensación o emolumento alguno, y serán seleccionados por la Junta de Gobierno, de entre los sectores público, social y privado, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Interior.

Artículo 26.- El Consejo Consultivo del Agua del Estado de Chiapas, emitirá opiniones y recomendaciones sobre las políticas del Instituto y los programas que éste ejecute, además de apoyar en las actividades de difusión y fortalecimiento a la cultura del agua, lo mismo que a la obtención de recursos que permitan el incremento de su patrimonio.

El Director General representará al Instituto y a la Junta de Gobierno ante el Consejo Consultivo del Agua del Estado de Chiapas.

Artículo 27.- El Consejo Consultivo del Agua del Estado de Chiapas, tendrá en lo general, entre otras, las funciones siguientes:

- I. Apoyar las actividades del Instituto y formular recomendaciones y sugerencias tendentes a su mejoramiento.
- II. Promover la obtención de recursos y convenios con instituciones nacionales y extranjeras, que

permitan el incremento de su patrimonio para el cumplimiento de su objeto en programas específicos.

- III. Formular al Director General del Instituto las propuestas para la consecución del objeto previsto en el artículo 3, de este Decreto.
- IV. Solicitar al Director General la información que requiera para el adecuado desempeño de sus funciones.
- V. Participar en la promoción y el desarrollo de los programas del Instituto.
- VI. Los demás que le correspondan en términos de este decreto, las que les atribuya el Reglamento Interior del Instituto, y demás normatividad que le resulte aplicable.

Transitorios

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día uno de enero de dos mil nueve.

Artículo Segundo.- Los recursos humanos, financieros y materiales, que correspondían a las áreas con atribuciones relacionadas al objeto del organismo que por este Decreto se crea, y que hasta la entrada en vigor del presente Decreto correspondían a la estructura orgánica de la Secretaría de Infraestructura y a la Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda, serán transferidos al Instituto Estatal del Agua.

Artículo Tercero.- Las menciones y atribuciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general, en cualquier disposición normativa, que refieran a las relacionadas al objeto del organismo que por este decreto se crea, se entenderán concedidas al Instituto Estatal del Agua.

Artículo Cuarto.- Los compromisos y procedimientos, que a la entrada en vigor del presente Decreto, hubieren contraído las áreas de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, relacionadas al objeto del organismo que por este decreto se crea, serán asumidos inmediatamente y se entenderán conferidos al Instituto Estatal del Agua.

Artículo Quinto.- Los trabajos de transferencia a que se refiere el Artículo Segundo Transitorio, deberán iniciarse al día siguiente de la publicación del presente Decreto; asimismo, las instancias conducentes procurarán incluir los recursos asignados al Instituto dentro de la iniciativa del Presupuesto de Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal inmediato.

Artículo Sexto.- Las Dependencias normativas del Poder Ejecutivo del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo de inmediato las acciones técnico administrativas que sean necesarias para la creación de la estructura orgánica y plantilla de plazas del Instituto que se crea, en plena observancia a las disposiciones aplicables y respeto los derechos laborales.

Artículo Séptimo.- El Reglamento Interior del Instituto, deberá ser expedido dentro de los noventa días hábiles siguientes a la publicación del presente Decreto.

Artículo Octavo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto, con las salvedades previstas en el mismo.

El Ejecutivo del Estado, dispondrá se publique, circule y se dé el debido cumplimiento.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a los 30 días del mes de Diciembre del año dos mil ocho.-D. P. C. Sami David David.- D. S. C. O. Magdalena Torres Abarca.- Rúbricas.

De conformidad con la fracción I del artículo 42 de la Constitución Política Local y para su observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil ocho.

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado.- Noé Castañón León, Secretario General de Gobierno.- Rúbricas.

**Secretaría de Gobierno
Dirección de Asuntos Jurídicos
Departamento de Gobernación**

Decreto Número 027

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber: Que la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado, se ha servido dirigir al Ejecutivo a su cargo el siguiente:

Decreto Número 027

La Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución Política Local; y,

Considerando

Que el artículo 29, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, faculta al Honorable Congreso del Estado, a legislar en las materias que no estén reservadas al Congreso de la Unión, así como, en aquellas en que existan facultades concurrentes, conforme a leyes federales.

La actual administración, ha sido partícipe en la atención inmediata y oportuna, así como la protección de los derechos de aquéllos afectados durante los lamentables acontecimientos ocurridos el día 3 de octubre del año en curso, en el ejido Miguel Hidalgo, Municipio de La Trinitaria.

Así, mediante Decreto número 249, publicado en el Periódico Oficial 119, Tomo III, Segunda Sección, de fecha miércoles 08 de octubre de 2008, a iniciativa del Ejecutivo del Estado, se autorizó otorgamiento de pensiones y becas, a consortes e hijos de los fallecidos el día 03 de octubre de 2008, en el municipio de La Trinitaria, e indemnizaciones a los directamente afectados en los mismos.

Sin embargo, derivado de los trabajos realizados por las Dependencias encargadas de la operatividad en el suministro de esos recursos, se hace necesario adecuar el contenido del referido Decreto, particularmente en torno a los beneficiarios de las becas para estudios.

Por las consideraciones antes expuestas, el Honorable Congreso del Estado de Chiapas, ha tenido a bien emitir el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL GOBIERNO DEL ESTADO A OTORGAR PENSIONES Y BECAS, A CONSORTES E HIJOS DE LOS FALLECIDOS EL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2008, EN EL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, CHIAPAS, E INDEMNIZACIONES A LOS DIRECTAMENTE AFECTADOS EN LOS MISMOS

Artículo Único.- Se reforman el tercer párrafo, del Artículo 3º, y el primer párrafo, del artículo 4, del Decreto por el que se autoriza al Gobierno del Estado a otorgar pensiones y becas, a consortes e hijos de los fallecidos el día 03 de octubre de 2008, en el Municipio de La Trinitaria, Chiapas, e indemnizaciones a los directamente afectados en los mismos, publicado en el Periódico Oficial 119, Tomo III, Segunda Sección, de fecha miércoles 08 de octubre de 2008, para quedar como sigue:

Artículo 3.- Se otorgará. . .

La pensión. . .

Las becas de estudios, cubrirán obligatoriamente hasta el nivel de educación superior, la cual tendrá las mismas características señaladas en el párrafo anterior.

Las becas. . .

I. a la III. . . .

Artículo 4.- Las pensiones y becas serán entregadas a las siguientes personas:

I. Pensiones:

- 1.- Luz Alfaro Velasco.
- 2.- Gloria Martínez Aguilar.
- 3.- Ofelia López Vázquez.
- 4.- Rebeca Hernández Ramírez.
- 5.- Eloisa Margarita Espinosa Morales.
- 6.- Rosalba López Pérez.

II. Becas:

- 1.- Rolando López Vázquez.
- 2.- Luz Marlene López Hernández.
- 3.- Rigoberto López Hernández.
- 4.- Uvaldo Pérez Martínez.
5. Yesenia Guadalupe Martínez López.

Las pensiones y becas. . .

Transitorios

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial.

Artículo Segundo.- De forma extraordinaria y tratándose de las personas mencionadas en los numerales 1 al 5, de la fracción II, del párrafo primero, del artículo 4, las becas que a estas se les otorguen ascenderán a un monto no mayor a lo establecido en la fracción I, del párrafo cuarto, del artículo 3º, de este Decreto, y serán otorgadas hasta que aquéllas cumplan la mayoría de edad.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 30 días del mes de Diciembre del año dos mil ocho.-D. P. C. Sami David David.- D. S. C. O. Magdalena Torres Abarca.- Rúbricas.

De conformidad con la fracción I del artículo 42 de la Constitución Política Local y para su observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil ocho.

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado.- Noé Castañón León, Secretario General de Gobierno.- Rúbricas.

**Secretaría de Gobierno
Dirección de Asuntos Jurídicos
Departamento de Gobernación**

Decreto Número 028

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber: Que la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado, se ha servido dirigir al Ejecutivo a su cargo el siguiente:

Decreto número 028.

El Pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución Política Local; y,

Considerando

Que mediante oficio número OR09/382/2008, de fecha 24 de Diciembre de 2008, y recibido por la Oficialía de Partes de este Poder Legislativo el 26 del mismo mes y año, signado por el ciudadano Jaime Antonio Mazariegos Zenteno, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Rayón, Chiapas, por medio del cual envió a esta Soberanía Popular Acta de Cabildo número 072/2008, en la que el citado Ayuntamiento aceptó y aprobó la renuncia del ciudadano José Antonio Villamontes Pérez, para separarse del cargo de Síndico Propietario. Anexó al citado oficio la autoridad municipal antes mencionada Acta de Cabildo original número 072/2008, de fecha 22 de Diciembre del año en curso; renuncia original de fecha 22 de Diciembre de 2008 y copia fotostática simple de la credencial para votar con fotografía del renunciante.

Que en Sesión Extraordinaria del Pleno de esta Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, de fecha 26 de Diciembre del 2008, fue leído el oficio mencionado en el párrafo anterior y otorgando consecución al trámite Legislativo correspondiente se turnó con el expediente respectivo para su estudio y dictamen a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Que los Ayuntamientos municipales son órganos de gobierno integrados por un presidente, un síndico, regidores propietarios y suplentes, además de los regidores electos según el principio de representación proporcional, conforme a lo que establecen los artículos 115, de la Constitución Política Federal, 58, de la Constitución Política Local y 20, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas.

Que el Consejo Municipal Electoral del Municipio de Rayón, Chiapas, en ejercicio de las atribuciones dispuestas por los artículos 10, 58, 59, 60 y 61, de la Constitución Política Local, en relación con las facultades que le confirieron los artículos 238 y 241, del entonces Código Electoral del Estado de Chiapas, calificó las elecciones que se celebraron el día 07 de Octubre del 2007, en dicho municipio, determinando la legalidad de las mismas, y en consecuencia las declaró válidas, publicando la planilla electa en el Periódico Oficial del Estado, número 073, de fecha 09 de Enero del 2008.

Que de acuerdo a la publicación antes mencionada, y del contenido de la Constancia de Mayoría y Validez de la elección de miembros del Ayuntamiento de Rayón, Chiapas, consta que el ciudadano José Antonio Villamontes Pérez, fue favorecido como Síndico Propietario en dicho Ayuntamiento.

Que mediante escrito de fecha 22 de Diciembre de 2008, el ciudadano José Antonio Villamontes Pérez, presentó ante el Ayuntamiento Municipal de Rayón, Chiapas, renuncia para separarse del cargo de Síndico Propietario.

En consecuencia a lo anterior, en sesión ordinaria de cabildo plasmada en el acta número 072/2008, de fecha 22 de Diciembre de 2008, el multicitado Ayuntamiento Municipal, aceptó y aprobó la renuncia del ciudadano José Antonio Villamontes Pérez, para separarse del cargo de Síndico Propietario, a partir del 01 de Enero del 2009.

En tal virtud, y que el Ciudadano José Antonio Villamontes Pérez, al haber presentado renuncia, se advierte la voluntad de no seguir desempeñando el cargo que le fue conferido como Síndico Propietario en el Ayuntamiento de referencia; por lo que a criterio del Pleno de este Poder Legislativo considera procedente la citada renuncia, misma que se encuentra debidamente justificada y por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, párrafo quinto, 80, párrafo primero, ambos de la Constitución Política Local y 21, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, se declara la ausencia definitiva al cargo conferido.

Cabe señalar que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de esta Sexagésima Tercera Legislatura, mediante dictamen de fecha 29 de Diciembre del 2008, aprobó por unanimidad de votos de sus miembros presentes la renuncia presentada por el ciudadano José Antonio Villamontes Pérez, para separarse del cargo a partir del 01 de Enero del 2009, de Síndico Propietario del Ayuntamiento Municipal de Rayón, Chiapas, y en dicho cargo propuso a la Honorable Asamblea de este Poder Legislativo, con fundamento en el artículo 166, párrafo segundo, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, que el ciudadano Jaime Sánchez Rodríguez, Síndico Suplente, ocupe el cargo de Síndico Propietario en el Ayuntamiento de cuenta.

Por las consideraciones y fundamentos antes expuestos, la Honorable Asamblea de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, expide el siguiente:

Decreto

Artículo Primero.- Se acepta la renuncia presentada por el ciudadano José Antonio Villamontes Pérez, para separarse del cargo de Síndico Propietario del Ayuntamiento Municipal de Rayón, Chiapas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, párrafo quinto, 80, párrafo primero, ambos de la Constitución Política Local y 21, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, se declara la ausencia definitiva al cargo conferido, a partir del 01 de Enero del 2009.

Artículo Segundo.- Con fundamento en el artículo 166, párrafo segundo, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, se nombra al ciudadano Jaime Sánchez Rodríguez, Síndico Suplente, para que a partir del 01 de Enero del 2009, asuma el cargo de Síndico Propietario en el Ayuntamiento de referencia.

Artículo Tercero.- Se expide el nombramiento y comunicado correspondiente, para que previa protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de cuenta, el múnicipe que se nombra asuma el cargo conferido.

Transitorio

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de la presente fecha.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y el Honorable Ayuntamiento Municipal de Rayón, Chiapas, proveerá a su debido cumplimiento.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 30 días del mes de Diciembre de 2008.-D. P. C. Sami David David.- D. S. C. Magdalena Torres Abarca.- Rúbricas.

De conformidad con la fracción I del artículo 42 de la Constitución Política Local y para su observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil ocho.

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado.- Noé Castañón León, Secretario General de Gobierno.- Rubricas.

**Secretaría de Gobierno
Dirección de Asuntos Jurídicos
Departamento de Gobernación**

Decreto Número 123

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber: Que la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado, se ha servido dirigir al Ejecutivo a su cargo el siguiente:

Decreto Número 123

La Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución Política Local; y,

Considerando

Que la fracción I del artículo 29 de la Constitución Política local faculta al Honorable Congreso del Estado legislar en las materias que no se encuentren reservadas al Congreso de la Unión, así como en aquellas en que existan facultades concurrentes conforme a las leyes federales.

Que a través de la Ley Orgánica del Instituto de las Artesanías, publicada en el Periódico Oficial número 388, Tomo II, de fecha doce de octubre de dos mil seis, se establece el Instituto de la Artesanías, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública del Estado, teniendo

como objetivo, rescatar, preservar y fomentar la producción, acopio, comercialización de artesanías del Estado de Chiapas, siendo modificada mediante decreto número 141, publicado en el Periódico oficial número 083, Tomo III, del cinco de marzo de dos mil ocho, para adecuar su denominación por la de Instituto de las Artesanías y Productos de Chiapas, adecuándose en consecuencia su objeto por el de rescate; preservación, fomento, promoción, acopio, distribución y difusión de artesanías y productos regionales del Estado de Chiapas.

Ahora bien, desde el inicio del actual Gobierno, se han tomado como ejes rectores de la política pública y la acción gubernamental el respeto a la legalidad y el fortalecimiento al Estado de Derecho, para lo cual se han venido promoviendo diversas acciones tendentes a consolidar a las instituciones y fortalecer su imagen pública, a través de la modernización y actualización del sistema legal en el que éstas sustentan su actuación y legitiman sus acciones como base fundamental de la función del Estado.

En tal virtud, y con el firme propósito de continuar con dicha política, se modifica el citado ordenamiento legal a efecto de modificar nuevamente su denominación y fortalecer tanto su objeto como sus atribuciones, traduciéndose todo ello en un mayor beneficio y oportunidades a los artesanos chiapanecos, impulsando asimismo el registro y comercialización de los productos y conceptos de la estrategia marca Chiapas.

Por las consideraciones antes expuestas, el Honorable Congreso del Estado de Chiapas, ha tenido a bien emitir el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE LAS ARTESANÍAS Y PRODUCTOS DE CHIAPAS.

Artículo Primero.- Se reforman la denominación; así como el artículo 1º; la fracción XVIII, del artículo 5º; las fracciones II y III, del artículo 8º; así como, la fracción VII, del artículo 15, de la Ley Orgánica del Instituto de las Artesanías y Productos de Chiapas.

Artículo Segundo.- Se adiciona la fracción XIX, al artículo 5º; y se adiciona la fracción VIII al artículo 15, de la Ley Orgánica del Instituto de las Artesanías y Productos de Chiapas.

Artículo Tercero.- Derivado de los artículos que anteceden, se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Instituto de las Artesanías y Productos de Chiapas, para quedar de la siguiente forma:

LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO MARCA CHIAPAS

Artículo 1º.- Se crea el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Chiapas, denominado Instituto Marca Chiapas, en lo sucesivo el Instituto, cuyo objeto es el rescate, preservación, fomento, promoción, acopio, distribución y difusión de artesanías, productos regionales, así como el impulso del registro y comercialización de los mismos mediante la estrategia marca Chiapas y Sistema de Tiendas Marca Chiapas, mismo que estará sectorizado a la Secretaría de Economía del Estado.

Artículo 5°.- . . .

I a la XVII. . . .

XVIII. Impulsar el Registro y comercialización de los productos y conceptos de la estrategia marca Chiapas, y el sistema de tiendas marca Chiapas.

XIX. Los demás asuntos que le correspondan, en los términos de las leyes aplicables, su reglamento Interior y los que le instruya el Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

Artículo 8°.- . . .

I. . . .

II. Un Secretario Técnico que será el Secretario de Turismo y Relaciones Internacionales.

III. Los vocales, que serán:

a) El Secretario de Hacienda.

b) El Secretario de Pueblos Indios.

c) El Secretario de Desarrollo Social.

Los Integrantes de la Junta . . .

El Presidente de la Junta . . .

Los cargos a que alude este artículo . . .

Artículo 15.- . . .

I a la VI. . . .

VII. Efectuar las acciones necesarias para el registro y comercialización de los productos y el concepto de la estrategia marca Chiapas, así como el sistema de tiendas marca Chiapas.

VIII. Todas aquellas que la Junta de Gobierno le encomiende en cumplimiento de la presente Ley, su Reglamento Interior y demás disposiciones aplicables.

Transitorios

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial.

Artículo Segundo.- Las menciones y atribuciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general, en cualquier disposición normativa, que se refieran al Instituto de las Artesanías y Productos de Chiapas, se entenderán concedidas al Instituto Marca Chiapas.

Artículo Tercero.- Se derogan las disposiciones que se opongan a presente Decreto.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 30 días del mes de Diciembre de dos mil ocho.-D. P. C. Sami David David.- D. S. C. O. Magdalena Torres Abarca.- Rúbricas.

De conformidad con la fracción I del artículo 42 de la Constitución Política Local y para su observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil ocho.

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado.- Noé Castañón León, Secretario General de Gobierno.- Rubricas.



Periódico Oficial

DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
CHIAPAS

DIRECTORIO

NOE CASTAÑON LEON
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

CARLOS ENRIQUE MARTINEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS

MANUEL DE JESUS ORTIZ SUAREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GOBERNACION

VICENTE ANTONIO MORALES AHUMADA
JEFE DE LA OFICINA DE PUBLICACIONES OFICIALES

DOMICILIO: PALACIO DE GOBIERNO, 2º PISO
AV. CENTRAL ORIENTE
COLONIA CENTRO, C.P. 29000
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

periodicof@secgobierno.chiapas.gob.mx
TEL.: (961) 6 - 13 - 21 - 56

IMPRESO EN:

